

¿Desarrollo “limpio” para quién?

Las comunidades
tienen la palabra



¿Desarrollo “limpio” para quién?

Las comunidades tienen la palabra



Impreso Junio 2012

Focus on the Global South

4th Floor CUSRI

Wisit Prachuabmoh Building

Chulalongkorn University

Bangkok 10330

THAILAND

**¿Desarrollo “limpio” para quién?
Las comunidades tienen la palabra**

Los/las autores e investigadores:

Nicola Bullard

Jacques-chai Chomthongdi

Emiloone West Fianza

Benny Kuruvilla

Rebecca Leonard

Mary Ann Manahan

Natthawut Uppa

Agradecemos a la Fundación Isvara, el World Development Movement y la Fundación Heinrich Boell por su apoyo a este proyecto de investigación y producción audiovisual.

Realizado con licencia de “creative commons”.

Esta publicación o parte de ella puede ser reproducido a condición de que el reconocimiento adecuado se entregará al autor o a la autora y Focus on the Global South. Focus agradecería recibir una copia del texto en el que se hace una citación o mención de este informe.

Para publicar cifras, imágenes, etc que no pertenecen a Focus on the Global South, por favor coordinar con los propietarios para obtener la autorización.

FOCUS ON THE GLOBAL SOUTH es una organización sin fines de lucro, de análisis de la política, investigación y de campaña, que trabaja en las coaliciones y campañas nacionales, regionales e internacionales, con los movimientos sociales y organizaciones de base sobre cuestiones clave que enfrenta el Sur global. Focus fue fundada en 1995 y se adjunta al Instituto de Investigaciones Sociales (CUSRI) de la Universidad de Chulalongkorn en Bangkok, Tailandia. Tiene oficinas también en las Filipinas y en la India. Para obtener más información acerca de Focus y acceder otras de nuestras publicaciones, por favor visite nuestro sitio web en <http://www.focusweb.org> or email us at info@focusweb.org

Impreso sobre papel reciclable y libre de ácido.

ISBN: 978-616-551-497-2

¿Desarrollo limpio para quién?

Las comunidades tienen la palabra

El contexto de Asia

El cambio climático implica una amenaza social, ambiental y económica real para Asia. La región alberga más de la mitad de los pobres del mundo, de los cuales dos tercios son mujeres. El 60% de la población mundial vive en Asia y de esta, el 60% depende de la agricultura, la pesca, los bosques y otros ecosistemas como medio de sustento. En las últimas décadas, Asia ha experimentado altos niveles de crecimiento económico aparejado con un aumento sin precedentes de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque ha levantado el PBI, este crecimiento no se ha visto reflejado en mejoras generalizadas del bienestar de las personas. Por el contrario, millones de personas fueron desplazadas y marginadas y los recursos naturales fueron agotados. En consecuencia, las comunidades y los ecosistemas son muy vulnerables a los impactos actuales y predecibles del cambio climático.

Las evaluaciones del impacto real y proyectado del cambio climático indican que la adaptación debería ser prioritaria en toda la región, dados los cientos de millones de personas cuyas vidas y medios de sustento serán y ya son afectados. Sin embargo, las instituciones regionales, los bancos multilaterales de desarrollo y los gobiernos nacionales están en general enfocando más su atención en la mitigación.

El crecimiento económico, por más que sea “verde” o “sustentable”, sigue siendo el objetivo central de las políticas gubernamentales en la región (con la notable excepción de Bután). Se considera que los proyectos de desarrollo

de infraestructura y energía son claves para lograr ese objetivo, e instrumentos como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) son percibidos como una fuente fácil de financiamiento para ese tipo de proyectos.¹

Hasta fines de 2011, el Directorio del MDL había aprobado y registrado 3500 proyectos. De estos, la amplia mayoría (un 79%) corresponden a Asia: China con el 46%, India con el 21%, y Malasia, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Corea del Sur e Indonesia completan el porcentaje restante con entre 1 y 3% cada uno.²

Con el Protocolo de Kioto hecho jirones, los países ricos se han dado maña para escabullirse exitosamente de cualquier tipo de meta vinculante de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Probablemente, el único componente del Protocolo de Kioto que quedará intacto será el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), un instrumento para el comercio de carbono que les permite a los contaminadores comprar, en lugar de realizar por ellos mismos, la reducción de emisiones. Estos Certificados de Emisiones Reducidas (CER) son generados por proyectos en países en desarrollo que supuestamente son “más limpios” que lo que de otro modo hubiesen sido, porque el incentivo financiero de poder vender CER les permite a los desarrolladores de los proyectos aplicar tecnologías más limpias y por ende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A eso le llaman “adicionalidad”. Es decir, se supone que estos proyectos “más limpios” se tornan económicamente “viables” gracias a los

ingresos que perciben por concepto de la venta de los CER, que son comerciados en mercados de carbono o negociados directamente entre el vendedor y el comprador a través de intermediarios.

Hay muchas razones para concluir que el MDL está lejos de ser la mejor manera de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e “incentivar” una transición hacia tecnologías más limpias y fuentes de energía renovables. En primer lugar, el precio de venta del carbono ha caído a menos de una décima parte de lo que los economistas estiman necesario a fin de enviar las “señales” correctas para reducir las emisiones de carbono. En segundo lugar, el argumento de que el MDL les permite a los países “pobres” invertir en tecnologías limpias y proyectos benignos para el clima es falaz, ya que casi el 70% de *todos* los proyectos MDL corresponden a iniciativas en India y China, dos países con recursos más que suficientes para invertir en energía limpia y renovable.

Pero una línea de investigación que no se ha explorado suficientemente es el impacto del MDL en la práctica. En esta serie de estudios de casos de proyectos de desarrollo limpio en Tailandia, India y Filipinas, recurrimos a las voces de las comunidades para averiguar si los proyectos MDL realmente impulsan el “desarrollo sustentable” que prometen.

Estos estudios de casos pueden leerse en detalle, y vienen acompañados de tres videos documentales breves que presentan las voces y puntos de vista de personas que viven y trabajan en comunidades próximas a proyectos MDL.

Las siguientes son, en resumen, las principales conclusiones de los estudios de casos:

Filipinas

Central hidroeléctrica de Ambuklao, provincia de Benguet, Luzón, Filipinas.

Propietario/desarrollador del proyecto: SN-Aboitiz Power Benguet (SNAPB), una empresa de riesgo compartido entre Aboitiz Power Corporation (APC) y Statkraft Norfund Power Invest AS de Noruega (SN Power), una empresa mundial de energía renovable de propiedad del gobierno noruego. Aprobado por el MDL.

Central hidroeléctrica de Binga, provincia de Benguet, Luzón, Filipinas.

Propietario/desarrollador del proyecto: SN-Aboitiz Power Benguet (SNAPB), una empresa de riesgo compartido entre Aboitiz Power Corporation (APC) y Statkraft Norfund Power Invest AS de Noruega (SN Power), una empresa mundial de energía renovable de propiedad del gobierno noruego. Aprobado por el MDL.

- No queda claro si estos proyectos hubiesen prosperado sin la aprobación del MDL y la renta consiguiente por la venta de CER. Sin embargo, una vez que fueron aprobados por el MDL, es evidente que los principales beneficiarios son las empresas, tanto en términos del lucro que obtienen como del maquillaje de su imagen corporativa.
- En vista del desequilibrio evidente entre las ‘partes interesadas’ en términos de la información que manejan y su comprensión de los temas en cuestión, cabe preguntarse si las consultas fueron significativas.
- La propia ineficacia del gobierno y su transgresión histórica de los derechos de estas comunidades le ha facilitado al sector privado dar un paso al frente y presentarse como una ‘alternativa’ al gobierno, ofreciendo medios de sustento, empleo e incluso dinero.
- En ese contexto, y con la falta de información y comprensión de los temas en cuestión, quizás sea difícil que las comunidades opongan resistencia a los impactos negativos de los proyectos y que garanticen para sí el provecho de sus beneficios económicos, sociales y ambientales.

Tailandia

A.T. Biopower, provincia de Pichit. Tailandia.

Propietario/desarrollador del proyecto: A.T. Biopower Co., Ltd. 22 MW, aprobado por el MDL.

Usina Buasomma I de generación eléctrica a base de biomasa, distrito de Muang Roi-Et. Tailandia.

Propietario/desarrollador del proyecto: Buasomma Electricity Generating Co., Ltd. 9,9MW, MDL en trámite.

- En ambos casos, una cantidad desproporcionadamente alta de personas que no viven cerca de las usinas fueron vistas participando en el proceso de consultas, dando lugar a que surjan inquietudes acerca de la legitimidad de los procesos.

- Las informaciones acerca de los beneficios potenciales de los bonos y mercados de carbono no estuvieron bien elaborados o incluso ni siquiera fueron debatidos con los miembros de las comunidades.
- La promesa de la usina Buasomma, que sostenía que generaría muchas fuentes de trabajo para la población local no se ha cumplido.
- Los Fondos de Desarrollo Comunitario a ser distribuidos entre las comunidades afectadas ya son un requisito exigido por leyes nacionales vigentes, por eso el dinero de la venta de bonos de carbono es un ingreso extra prácticamente sin ninguna condición para la empresa.
- Los problemas ambientales, la contaminación y los impactos a la salud de las comunidades han sido evidentes, a pesar del hecho que uno de los proyectos se sometió al proceso de evaluación de impacto ambiental y recibió CER, y el otro está en trámite en el MDL.

India

Ultra megaproyecto energético de Tata, aldea de Tundawand, provincia de Mundra, estado de Gujarat.

Propietario/desarrollador del proyecto: Coastal Gujarat Power Limited (CGPL) subsidiaria del Grupo Tata, 4000 MW. MDL en trámite

- La usina está emplazada en una región ecológicamente sensible y el EIA no tuvo en cuenta los impactos locales del proyecto ni sus impactos más generales. El EIA tiene además como punto de partida informaciones falsas, afirmando que el área de desarrollo del proyecto está “inhabitada”.
- El sustento de la población local, basado en la pesca, la extracción de sal, la agricultura y la ganadería está estrechamente ligado a la ecología. Es poco probable que esos pobladores consigan empleo en la usina de energía, o siquiera que les suministren electricidad, aunque la usina está contaminando sus caladeros de pesca, su agua dulce y la atmósfera.
- La reivindicación de adicionalidad es espuria. Primero, porque el proyecto obtuvo financiamiento y se desarrolló aún sin estar acreditado por el MDL –es decir, las rentas del MDL no eran esenciales para la viabilidad del proyecto. En segundo lugar, porque la frágil fundamentación de CGPL para solicitar bonos de carbono se basa en que está empleando tecnología supercrítica, una opción

más costosa que la básica “sub-crítica”. Pero ésta es una afirmación falsa, ya que el Ministerio de Energía exige que *todas* las usinas térmicas de gran porte que funcionan a carbón en India utilicen tecnología supercrítica, motivo por el cual en las esferas de la política energética esa tecnología ya dejó de ser considerada como adicional.

- Una vez que esté en funcionamiento, la usina CGPL será una de las fuentes individuales de emisiones de gases de efecto invernadero más grandes del mundo, emitiendo hasta 26 millones de toneladas de CO₂ por año.

Estas conclusiones no son una afirmación de verdades absolutas, admiten matices e interpretaciones, pero eso no quiere decir que haya motivo para concluir que al MDL se lo puede “mejorar”.

Nuestro análisis del MDL, así como el de muchas comunidades y organizaciones en toda Asia, es que se trata de una extensión del enfoque del desarrollo basado en grandes proyectos y uso intensivo de energía que ha marginado sistemáticamente a los pueblos indígenas y comunidades locales y sobreexplotado la Tierra.³ El “mecanismo de desarrollo limpio” es simplemente un mecanismo que les permite a los contaminadores eludir reducciones obligatorias de emisiones en un lugar determinado y transferirlas a otro lugar. Al mismo tiempo, les permite a las grandes empresas y los organismos estatales extraer ganancias adicionales de proyectos que son cuestionables desde el punto de vista de la sustentabilidad y los beneficios que supuestamente les reportan a las comunidades, e incluso en términos de su contribución a la lucha contra el cambio climático.

- 1 ¿Qué es el MDL? El mecanismo de desarrollo limpio (MDL) permite que proyectos de reducción de emisiones (o eliminación de las emisiones) en países en desarrollo obtengan bonos certificados de emisiones reducidas (CER), cada uno equivalente a una tonelada de CO₂. Estos CER se pueden comerciar y vender, y los países industrializados los usan para cumplir con parte de sus metas de reducción de emisiones según el régimen del Protocolo de Kioto. El mecanismo estimula el *desarrollo sostenible y la reducción de emisiones* (cursivas nuestras) al mismo tiempo que les brinda a los países industrializados cierta flexibilidad para cumplir con sus metas de reducción de emisiones. <http://cdm.unfccc.int/faq/index.html>, Sitio visitado el 28 mayo de 2012.
- 2 Informe anual del Directorio Ejecutivo del mecanismo de desarrollo limpio para la Conferencia de las Partes, que sirve como reunión de las Partes del Protocolo de Kioto. Primera parte (octubre 2010 – octubre 2011) FCCC/KP/CMP/2011/3 (Parte I). http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&preref=600006560&suchen=ag&id_ag=92&anc=26. Sitio visitado el 28 de mayo de 2012.
- 3 Véase por ejemplo, *Food, Livelihoods & Climate Change in the Mekong Region: Summary Report of International Workshop*, Focus on the Global South, 2011. <http://www.focusweb.org/content/food-livelihoods-climate-change-mekong-region-summary-report-international-workshop>. Sitio visitado el 28 de mayo de 2012.

¿Quién se beneficia con el MDL? Perspectivas y voces de las comunidades

Un estudio de caso en Filipinas
Focus on the Global South¹
Enero 2012

Presentación

Filipinas se encuentra en la frontera occidental del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con volcanes activos, fallas sísmicas importantes y huracanes tropicales. Esto hace que el país sea más vulnerable a los eventos meteorológicos extremos causados por el cambio climático. En las últimas seis décadas, la temperatura promedio anual aumentó 0.57°C.² De acuerdo a las simulaciones de la Asociación de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas, el principal organismo de servicios de alerta y pronósticos meteorológicos, se espera un calentamiento generalizado para el período entre los años 2020-2050, con días calurosos más largos y días fríos más cortos. También se han registrado anomalías climáticas severas como sequías, fuertes lluvias e inundaciones, y una cantidad creciente de tifones y tormentas tropicales. Filipinas califica como tercero en la lista de países más vulnerables al cambio climático. En un informe realizado por el Instituto Universitario de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Seguridad Humana y la Alianza Development Works de Alemania, Filipinas figura con un riesgo de catástrofe del 24,32%, detrás de Vanuatu, el país más vulnerable al cambio climático (con un riesgo de catástrofe del 32%) y Tonga, en el segundo lugar con un riesgo del 29,08%.

Aunque la vulnerabilidad del país seguirá aumentando en el futuro, la capacidad de la mayoría de la población para sobrellevar los impactos es limitada debido a la pobreza, la falta de acceso a capital social, la fragmentación institucional y las brechas de gobernanza. De las 32 provincias con un

registro de pobreza de al menos el 40%, la mitad son azotadas por tifones por lo menos una vez al año.³

Para hacer frente a ese desfase y la necesidad de incorporar el tema del cambio climático a la formulación de políticas gubernamentales, el gobierno filipino aprobó la Ley de Cambio Climático de 2009 (Ley de la República 9729). En 2010 también se formuló el Marco Estratégico Nacional sobre Cambio Climático como plan general para garantizar la resiliencia del país al cambio climático mediante un conjunto equilibrado de iniciativas de mitigación y adaptación, y para trazar una senda de desarrollo más limpio.⁴

Uno de los desafíos para el gobierno es que carece de una estrategia de financiamiento para enfrentar sus necesidades asociadas al cambio climático, especialmente para medidas de adaptación. El 'estudio nacional ambiental sobre economía y desarrollo para el cambio climático' (NEEDS, por su sigla en inglés), que analizó los flujos financieros para el desarrollo que ingresaron al país, concluyó que los recursos presupuestarios destinados por el gobierno filipino a la adaptación al cambio climático han sido más que insuficientes. A tal punto que el componente más importante de ese presupuesto destinado al manejo de catástrofes sólo reflejó entre 2003 y 2008 los costos de rehabilitación y asistencia pos-desastres, en lugar de tratar de mitigar los riesgos y los daños esperables tras catástrofes naturales.⁵

La vulnerabilidad climática del país y las restricciones financieras características de los programas gubernamentales



Binga es una comunidad agrícola, conocida por sus terrazas de arroz.

constituyen un ambiente perfecto para promover distintos mecanismos de crédito o financiamiento basados en el mercado, que prometen proporcionar las inversiones que el país tanto necesita para resolver sus necesidades asociadas con el cambio climático.

Filipinas ha fijado su atención en el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto como una fuente posible de inversión para llevar a cabo actividades de mitigación climática, iniciativas de desarrollo sustentable y para atraer a inversionistas extranjeros. A marzo de 2012, la CMNUCC reconoce la existencia de 42 proyectos MDL en Filipinas, lo que corresponde a menos del 1% de los 3.886 proyectos MDL registrados a nivel mundial, 83% de los cuales ocurren en países de Asia-Pacífico. Casi el 75% de los proyectos en Filipinas están asociados a los desechos, e incluyen desde rellenos sanitarios y proyectos de tratamiento de aguas residuales hasta estiércol de cerdos, biogás y desechos agrícolas. Los restantes son proyectos de energía renovable tales como hidroeléctricas y proyectos de energía geotermal y de generación de electricidad a partir de la cáscara de arroz. Además, una abrumadora mayoría de los bonos de carbono adjudicados provendrán de la instalación de equipamiento o tecnología como parte de un proyecto o una estructura preexistente –por ejemplo la instalación de tuberías de recuperación en rellenos sanitarios, de biodigestores en establecimientos de cría y engorde de cerdos, de incineradores

en hornos de cemento, y la rehabilitación de centrales hidroeléctricas existentes.⁶ Los restantes provendrán de proyectos individuales que implican la construcción de nuevas centrales de energía eólica y geotermal.

La mayoría de los proyectos incluyen financiamiento procedente de Europa: el Reino Unido e Irlanda del Norte, España, Países Bajos, Suiza e Italia. El Reino Unido e Irlanda del Norte especialmente tienen una participación excepcional con 28 proyectos MDL a pequeña escala, como la instalación de biodigestores en granjas de cerdos, energía renovable, rellenos sanitarios y recuperación de metano. La reducción estimada de emisiones mediante estos proyectos es de 954.423 toneladas métricas de dióxido de carbono (CO₂) por año.

Aunque el gobierno espera obtener ganancias a partir del MDL, hay funcionarios del organismo que controla y aprueba los proyectos, que son conscientes que se trata en realidad de artilugios de las empresas y a las elites locales para ganar más dinero.⁷ Según el informe de investigación sobre los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio en Filipinas titulado “*Clean Development Mechanism Projects in the Philippines: Costly, Dirty, Money-making Schemes*” (Focus on the Global South, 2010) es posible que el multimillonario MDL promueva, en lugar de mitigar, el cambio climático al recompensar con ingresos adicionales

a los contaminadores. Los principales beneficiarios de esos proyectos son la oligarquía nacional –las familias más ricas y las empresas más grandes que tienen intereses en las “industrias sucias” con enormes huellas de carbono tales como las industrias de la energía a petróleo, gas y carbón, la aviación y las industrias extractivas como la minería y la tala de árboles.⁸

Pero muchos de los promotores del MDL sostienen que los proyectos benefician a las comunidades donde éstos se desarrollan. ¿Es eso realmente lo que ocurre? ¿Cuáles son los problemas que rodean al MDL en la práctica? ¿Quién se beneficia realmente con el MDL y qué opinan de esos proyectos las comunidades supuestamente beneficiarias?

Este documento ofrece algunas reflexiones y respuestas a estas preguntas. Los siguientes estudios de casos centran la atención en dos de las centrales hidroeléctricas más antiguas de Filipinas, que se cuentan además entre las primeras hidroeléctricas que fueron aprobadas en el marco del MDL.

Estudios de caso: las centrales hidroeléctricas Ambuklao y Binga

El gobierno de Filipinas tiene la mira puesta en al menos diez proyectos MDL para implementarlos en el marco del Plan de Desarrollo Filipino a Mediano Plazo 2006-2010.⁹ El MDL figura también entre las opciones a concretar para

darle impulso al desarrollo de fuentes de energía renovable en el país a través de la Ley de Energía Renovable de 2008. El propósito de esa ley es estimular la inversión y participación del sector privado en la industria de la energía renovable mediante incentivos fiscales y de otro tipo.

La capacidad instalada de producción eléctrica del país es de 15.610 megavatios y en ella predominan enormemente las usinas de generación a partir de combustibles fósiles: las usinas a carbón dan cuenta del 27,4% de esa capacidad, seguidas por las usinas a base de petróleo que representan el 20,46%, y 18,14% las que lo hacen a gas natural. La energía renovable solo asciende a un poco más del 34% (hidroeléctrica: 21,09%; geotermal: 13%; y biomasa, solar y eólica solo ascienden al 0,5%). El gobierno de Filipinas reconoce que reducir el consumo de combustibles fósiles y promover el desarrollo y uso de energías renovables representa aún un gran desafío.¹⁰

La industria y el mercado liberalizado de energía establecidos mediante la Ley de la Reforma de la Industria de la Electricidad (EPIRA, por su sigla en inglés) dependen en gran medida del sector privado para la generación, transmisión y distribución de energía. Hasta junio de 2010, el gobierno había privatizado 26 de sus usinas generadoras u operadores de energía y cuatro centrales que estaban fuera de servicio. Dos de estas son las centrales hidroeléctricas Ambuklao y Binga, que se vendieron a SN-Aboitiz Power Benguet (SNAPB), una empresa de riesgo compartido (*joint venture*) entre Aboitiz Power Corporation (APC), propiedad del magnate empresarial filipino Aboitiz, y Statkraft Norfund Power Invest AS de Noruega o SN Power, que es una empresa mundial de energía renovable de propiedad del gobierno noruego.



Las centrales Ambuklao y Binga, las dos hidroeléctricas más antiguas del país, fueron las primeras usinas de energía renovable registradas como proyectos MDL. Esas usinas fueron autorizadas por el directorio del MDL como proyectos MDL a principios de 2011. Pero desde septiembre de 2007, un mes después que el gobierno de Filipinas abriera el proceso de licitación para la privatización de las dos centrales, SNAPB ya había contratado a una empresa privada, Point Carbon, para que le asesorara sobre las posibilidades de reciclaje de Ambuklao y Binga como proyectos MDL. En mayo de 2008, una vez que SNAPB había ganado la licitación y se habían firmado los contratos de cesión de las dos hidroeléctricas de Ambuklao y Binga, el directorio de la empresa aprobó una resolución para poner en marcha las centrales como actividad del MDL, sosteniendo que los ingresos derivados de la venta de Certificados de

Emisiones Reducidas (CER) eran esenciales para garantizar la viabilidad de esos proyectos hidroeléctricos.¹¹

En septiembre de 2008, SNAPB presentó ambas centrales al MDL con el objetivo doble de vender certificados de emisiones reducidas (CER) y reducir las emisiones de Filipinas compensando las emisiones o desplazando la electricidad generada por las usinas de generación con combustibles fósiles para la red Luzon-Visayas, a la cual están conectadas las dos hidroeléctricas.

Estos proyectos MDL implican la reactivación de la represa Ambuklao que está conectada a la red, tras un paréntesis de 12 años en los que estuvo desactivada debido a su encenagamiento por la sedimentación provocada por un gran terremoto en 1990; y la modernización de la central hidroeléctrica Binga, puestas en servicio en 1956 y 1960 respectivamente por la empresa estatal de generación de energía National Power Corporation (NPC). La central Ambuklao tiene una capacidad instalada de generación de 75 megavatios (MW) mientras que la capacidad instalada de la central Binga es de 100 MW. A través del MDL, la capacidad combinada de las centrales aumentará en más de un 25% (Ambuklao a 100 MW y Binga a 120 MW). Ambas



(Izquierda) Ancianas de los Ibaloi
(Abajo) Sitio de patrimonio de Ambuklao



(Derecha) Sitio de patrimonio de Ambuklao (Abajo) La comunidad de Ibaloi celebra la declaración del sitio de patrimonio de Ambuklao con una danza tradicional.



están ubicadas sobre el Río Agno a la altura de los pueblos de Bokod e Itogon en la Provincia Benguet, en un valle relativamente estrecho y flanqueado de pendientes bastante acentuadas, aproximadamente a 160-180 kilómetros al noroeste de la capital de Filipinas.

A través de la *Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation* (PSALM), la empresa estatal controlada por el gobierno que administra los activos, deudas y contratos de la NPC, el gobierno filipino privatizó ambas centrales hidroeléctricas en 2008 como parte del programa nacional de privatización del sector energético. Ambuklao y Binga están diseñadas como centrales de energía pico, lo que significa que sólo se privatizaron los activos de energía hidroeléctrica (las usinas de generación), mientras que las instalaciones que no están directamente asociadas a la generación —como las represas— continuaron siendo de propiedad del gobierno.



Ambos proyectos MDL le redituarán aproximadamente 180.000 bonos de carbono anuales a SNAPB. Combinadas reportarán una reducción total de emisiones que se espera ascienda a 1.278.117 toneladas de dióxido de carbono en el primer período de acreditación de siete años. Más de tres cuartos de esa reducción de emisiones estimada provendrán de la hidroeléctrica Ambuklao.

Financiamiento de la Corporación Financiera Internacional

El 17 de junio de 2008, la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del grupo Banco Mundial para el sector privado, proporcionó un préstamo de 100 millones de dólares a SNAPB. Según el resumen de la inversión propuesta, se estima que el proyecto total costará aproximadamente 560 millones de dólares estadounidenses. Las fuentes, todas de fondos privados, incluyen el préstamo de la CFI por 100 millones de dólares, un préstamo del

Banco de Inversión Nórdico por 60 millones de dólares, un consorcio de bancos locales con 200 millones de dólares y se espera que la suma restante la financien capitales propios y un flujo de efectivo generado internamente. El préstamo se usará, entre otras cosas, para pagar el precio de adquisición de 325 millones de dólares, es decir, el costo de comprar las dos centrales del gobierno y los gastos de rehabilitación y reacondicionamiento por cerca de 170 millones de dólares estadounidenses. La CFI ya expresó su respaldo total al hecho que ambos proyectos se hayan registrado como parte del MDL.

Denuncias de las comunidades indígenas y la CAO

Algunos días después que se aprobara el préstamo de la CFI el 17 de junio, antes de la acreditación de las centrales de Ambuklao y Binga en el marco del MDL, los miembros de la comunidad indígena Ibaloi y los habitantes del pueblo Tinongdan, Itogon en Benguet presentaron una denuncia



contra las centrales hidroeléctricas Ambuklao y Binga ante la Oficina del Asesor de Cumplimiento/Defensor del Pueblo (CAO, por su sigla en inglés), que es un organismo independiente y un mecanismo de apelación que analiza las denuncias de las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo implementados con el apoyo de los miembros del grupo Banco Mundial para el sector privado (la CFI) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por su sigla en inglés).¹² La CAO, establecida por el Banco Mundial (BM), está directamente al mando del Presidente del Banco Mundial y su mandato es mejorar la rendición de cuentas de la CFI y el MIGA en materia social y ambiental.

En base a su propio documento Marco de Sostenibilidad, la CFI ya identificó que el proyecto debe encarar los siguientes problemas y mejorar su desempeño en los siguientes rubros: la capacidad de gestión social y ambiental de SNAPB, y el apoyo técnico esperado de los patrocinadores; las responsabilidades civiles derivadas de las operaciones pasadas en lo ambiental y las acciones correctivas planificadas; la sedimentación de los reservorios; un plan de mejoría y reacondicionamiento ambiental; la seguridad de las represas y los reservorios; un plan de gestión de cuencas; y relacionamiento activo con las comunidades de pueblos indígenas cuyos medios de vida dependen de los recursos naturales de los reservorios y cuencas hidrográficas. Lo único que quedó excluido de ese marco de sostenibilidad fue la adquisición de las tierras y el restablecimiento involuntario, ya que la tierra ya había sido adquirida y los pueblos indígenas habían sido reubicados hace 50 años cuando se construyeron originalmente las dos represas.

Peró la rehabilitación y privatización de las dos hidroeléctricas reavivó tensiones históricas en el seno de la comunidad, ya que los Ibaloi fueron desplazados por el proyecto hidroeléctrico original. Como pueblo desplazado, plantearon el problema del desplazamiento y el despojo de sus propiedades y las

tierras y medios de vida de las comunidades locales, y del acceso a empleos y oportunidades económicas para los miembros de la comunidad local. La demanda presentada ante la CAO se centró en tres temas. En primer lugar, los reclamos de tierras de la comunidad indígena Ibaloi y los habitantes de Ambuklao y Binga, que aún no se habían resuelto cuando se planificó la privatización de las centrales en 2008. El segundo hace referencia al acceso a fuentes de trabajo y oportunidades económicas para los miembros de las comunidades locales. Y el último, a que el plan de privatización debía respetar estándares adecuados.

En respuesta a las demandas de las comunidades afectadas por el proyecto, la CAO envió un equipo de campo a Ambuklao y Binga del 16 al 23 de julio de 2008. El objetivo del equipo de campo era evaluar la situación y hablar con los grupos implicados, entre ellos los líderes de las comunidades, el Consejo de Ancianos, funcionarios electos de varios niveles del gobierno de Bokod y Tinongdan, una familia de demandantes (la familia Lampitao), miembros de la comunidad y altos funcionarios de SNAPB, empresas estatales controladas por el gobierno como la NPA, la PSALM, agencias gubernamentales como el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas.

El 30 de julio de 2008, la CAO presentó un documento marco de evaluación de las partes interesadas que orientó su intervención en el proyecto de las centrales hidroeléctricas Ambuklao y Binga de SNAPB. La CAO clasificó los intereses de los diversos grupos implicados en tres: reconocimiento y respeto del pasado; construcción de una relación colaborativa; y ayuda para generar oportunidades conjuntas, incluyendo oportunidades socio-económicas para el futuro. Luego se embarcó en un proceso de tres etapas durante siete meses, diseñado para pensar en una solución en la que todos

ganasen: ayudar y fortalecer a las instituciones comunitarias existentes (unidades del gobierno local y organizaciones de los pueblos indígenas) y a las empresas para que representasen de manera efectiva las opiniones de sus partes y constituyentes; entrenar y capacitar conjuntamente a las distintas partes interesadas para un diálogo colaborativo multisectorial; y facilitación de un proceso de diálogo que involucre a representantes de las comunidades indígenas, funcionarios públicos locales, la NPC y PSALM y SNAPB. El proceso, según el Informe de Conclusión de la Demanda elaborado por la CAO (agosto de 2009) fue especialmente diseñado, ya que incluía una mediación basada en valores y capacitación para las negociaciones, y facilitaba el diálogo en lugar de un enfoque de confrontación entre adversarios.

La CAO consiguió negociar un acuerdo final entre todas las partes que fue firmado en mayo de 2009. El memorando del acuerdo contiene las siguientes disposiciones:

- acceso a la tierra y derechos de usufructo para las comunidades y propiedad comunal incluyendo el establecimiento y desarrollo de un sitio de Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas.
- beneficios locales del fondo de Responsabilidad Social Empresarial de la empresa privada e ingresos para el gobierno local,
- mejoras de los medios de sustento de los pobladores locales a través de programas de protección y desarrollo de cuencas de la NPC.
- oportunidades de empleo local y beneficios ofrecidos por SNAPB a través de contratos de adquisición de bienes y servicios.¹³

Voces de las comunidades y visión de conjunto

Falta de información y ciudadanía activa

Según miembros de las comunidades de Binga y Ambuklao, SNAPB realizó dos consultas independientes sobre los planes de rehabilitación de las hidroeléctricas y sobre el MDL. Cabe anotar que estas consultas se realizaron antes de la evaluación de campo de la CAO. El 14 de julio de 2008, SNAPB realizó una consulta con 144 ‘partes interesadas’ del pueblo de Tinongdan. En Ambuklao, la consulta se realizó el día siguiente, el 15 de julio, y participaron 169 habitantes y autoridades. En ambas ocasiones, según SNAPB, no recibieron ningún comentario antes de las consultas.

A través de las consultas, SNAPB logró obtener la aprobación general y la aceptación social de sus planes de reactivación de la central Ambuklao y modernización de la central Binga. La empresa también presentó sus programas y planes para obtener la aprobación de las comunidades. Entre otras, la mejora de los medios de vida y otras oportunidades económicas tales como fuentes de trabajo locales en la comunidad, la promoción del uso sustentable de los recursos naturales, educación y fortalecimiento de las capacidades de las partes interesadas locales (sobre temas agroforestales, protección de los bosques y lucha contra los incendios forestales; nombramiento de un Funcionario de Relaciones Comunitarias) y suministro de recursos financieros a la comunidad, con 2,4 millones de pesos filipinos o 56.000 dólares estadounidenses por año para subsidios de electricidad, de los cuales una parte provendría de su fondo de responsabilidad social empresarial (RSE).



El abogado Michael Hosillos, vicepresidente de Asuntos Empresariales de SNAPB estaba seguro y optimista de que todos se beneficiarían con el proyecto MDL de las hidroeléctricas Ambuklao y Binga.¹⁴ Según él, la comunidad anfitriona tiene todas las de ganar. A través de la venta o comercio efectuado por SNAPB de los 180.000 CER que las centrales pueden generar anualmente, se pueden realizar más proyectos para las partes interesadas, principalmente los pueblos indígenas de la tribu Ibaloi.

Si se juzga por la actitud general positiva de los miembros de las comunidades de Binga y Ambuklao con respecto a SNAPB, las promesas de “responsabilidad social empresarial” parecen estar funcionando. Pero las entrevistas con los miembros de la comunidad revelan una historia diferente.

En primer lugar, la mayoría de los habitantes entrevistados no saben nada del MDL. Los habitantes de Ambuklao y Binga no conocen los detalles, qué significa realmente el MDL y por qué la empresa privada registró a las hidroeléctricas como parte de ese mecanismo. Por ejemplo, comentarios como *“haan ko ammo dayta”* (no sé qué es eso / el MDL) o *“saan ko sa naawatan dayta a”* (creo que no entendí...) fueron la respuesta habitual de otros habitantes entrevistados de Ambuklao y Binga. Las autoridades del pueblo, por otro lado, afirmaron saber del MDL. Por ejemplo, un miembro del consejo del pueblo de Binga, el señor Ramon Capsula, dijo que la empresa le brindó a la comunidad información sobre el MDL. Según Capsula, *“Ada. They even brought that information idjay baranggay. Actually ti baranggay, ada met ti informationda iti CDM. Dagitada ngarud ket haan da mabalin nga ma i-implement, kailangan da metlaeng iti sitwasyon ti community. They briefed both the baranggay officials ken dagijay organizations. Isunga dagita ket well-informed.* (Sí. Incluso le acercaron la información al baranggay. El baranggay tiene información sobre el MDL. Ellos no pueden implementarlo sin la comunidad. Informaron tanto a los funcionarios del baranggay como a las organizaciones comunitarias. Están bien informados).

Aunque quedó claro a medida que avanzaba la entrevista que Capsula no entendía los detalles precisos y mecanismos del MDL, sí dijo *“Iti company ket hydro...green energy. Makita tayo nga haan da unay nga producer iti carbon dioxide. Isu nga nu kitkitan ket, pabor tayo. Talaga nga mayat. Ada kuma ti close coordination ti LGUs tapno parallel with their program.”* (La empresa es hidro...energía verde. Podemos ver que no producen mucho dióxido de carbono. Por eso estamos

a favor. Es genial. Pero debería haber una coordinación estrecha con las unidades locales del gobierno para que sea paralelo a su programa).

La principal fuente de información sobre el MDL provenía claramente de SNAPB. Cuando se les preguntó si las comunidades recibieron otra información sobre el tema que no proviniera de la empresa, los entrevistados dijeron al unísono *“haan”* (ninguna), ni siquiera del gobierno local.

Si bien reconocen los esfuerzos realizados por SNAPB para ayudar a la comunidad y cumplir con sus promesas, algunos habitantes se preguntan quién se beneficia con el MDL. Según un habitante de Ambuklao, la empresa obtendrá ganancias seguramente, pero qué beneficios obtendrá la comunidad o la gente. *“Ngeum nu private, idjay manen ti ikablan da, ti kayat ko ditoy barangay tano pag-ay-ayamen mi met nga datayo nga kwa.”* (Si es privada...lo que quiero es que el baranggay reciba beneficios para que podamos tener algo con lo que trabajar), dijo Benny Macloy de Ambuklao. La empresa, por otro lado, afirmó durante las consultas que todavía no han obtenido ganancias de los bonos de carbono porque destinaron millones para la rehabilitación de las dos hidroeléctricas. Esto lo reiteró Macloy en Ilocano, *“Haan da pay nga nag-subot piman ta milyon ti ingastos da.”* (No han obtenido ganancias de él (el MDL) porque gastaron millones).

Una observación general que viene al caso es si las “consultas” pueden ser significativas cuando hay un desequilibrio tan grande entre las distintas partes interesadas desde el punto de

Entrevistas con ancianos de Ibaloi y pobladores de Ambuklao y Binga.





vista de la comprensión que tienen de los temas en cuestión. Tomemos como ejemplo sus opiniones sobre el cambio climático. Muchos de los entrevistados son conscientes de los cambios en el medioambiente, pero no conocen el término “cambio climático”. Si bien no hay consenso sobre si el cambio climático es real o no, los habitantes coinciden respecto de los patrones meteorológicos erráticos e impredecibles que experimentan colectivamente. Según ellos, las temporadas secas o húmedas son o más largas o más cortas que lo usual. Cada vez son más comunes las temperaturas extremas tanto frías como calientes. Son también frecuentes las enfermedades respiratorias que afectan la salud de los habitantes de las comunidades. El agua es cada vez más escasa.

Los habitantes culpan colectivamente a la quema como culpable del cambio climático. Algunos habitantes admitieron que quemaban su basura, pero otros simplemente no conocen los efectos del cambio climático. Quizás, estos habitantes todavía no sintieron los grandes cambios climáticos en su zona y la difusión de información en su comunidad probablemente no sea tan efectiva.

Los habitantes que están familiarizados con el cambio climático están involucrados en causas personales. Por ejemplo, el líder del pueblo Ramon Capsula trabaja para poner fin a todo tipo de quema en las comunidades. El habitante de Ambuklao, Ceryl Eckman, por otro lado, recicla y recolecta sus residuos biodegradables en un pozo para usarlos como fertilizante. Pero los funcionarios públicos informados como Ramon Capsula propusieron que para enfrentar el cambio climático “*papigsaen da kuma iti political will. Dapat nga agtinulong ti DENR, kapulisan ken local officials. Ada kuma metten ti aramididen da, ti rigat na, awan iti action. Isu nga inggana tatta, kasla nga ay-ayam laeng iti panunot.*” (Se

debería fortalecer la voluntad política. El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la policía y los funcionarios públicos locales deberían ayudarse entre sí. El problema es que nadie hace nada, hasta ahora...es como que no son serios...)

Privado vs. público

La historia de las centrales hidroeléctricas adquiridas por la empresa está plagada de daños ambientales y violaciones a los derechos humanos, especialmente de pueblos indígenas que pertenecen a la tribu Ibaloi. En este caso el responsable es el gobierno de Filipinas. Ramon Capsula, uno de los líderes de la comunidad Binga, dijo que la central hidroeléctrica se había establecido en nombre del interés nacional, pero el proyecto desalojó a las personas de su comunidad, las expulsó de sus tierras, privándolas de sus medios de sustento y sus fuentes de ingreso.

SNAPB está re-encarando las vulnerabilidades y viejas heridas de las comunidades. Según Capsula “con los Aboitiz hay una gran diferencia. En primer lugar, destinaron 1 millón de pesos filipinos para cada comunidad anfitriona, y también 1 millón de pesos filipinos (aproximadamente 23.500 de dólares) para la municipalidad. En base a mi experiencia, independientemente de sus proyectos de responsabilidad social empresarial, llevan a cabo misiones médicas y varios proyectos para la comunidad. Gastan en Responsabilidad Social Empresarial. Apoyan económicamente la capacitación de los funcionarios públicos. Veo que están ayudando mucho. Los he visto personalmente”. Los entrevistados tenían en general un buen concepto de la empresa. Las autoridades locales del pueblo estaban especialmente felices con la compra de las dos hidroeléctricas por la empresa. El honorable Benjamin Saguid, miembro de la junta provincial



del primer distrito de Benguet, incluso esperaba que la empresa se quedara por mucho tiempo.

SNAPB se está ganando en efecto la confianza de las comunidades prometiéndoles empleo, proyectos para su sustento y subsidios a la electricidad y patrocinando eventos socio-culturales como el Mes de los Pueblos Indígenas, el Mes de los Ciudadanos Mayores y una actividad para escalar el Mt. Purgatory, para las cuales destinaron 100.000 pesos filipinos o 2.353 dólares estadounidenses.

El proceso de negociación de la CAO también contribuyó a generar un clima de relaciones de buena fe entre SNAPB y las comunidades de Binga y Ambuklao. En estas comunidades que han sufrido años de injusticias y con una animosidad colectiva dirigida a los gobiernos locales y nacionales, al sector privado le es definitivamente fácil convertirse en su “caballero andante”.

Los habitantes y pueblos indígenas de Ambuklao y Binga opusieron históricamente resistencia a la construcción de las dos represas por el gobierno y a la gestión de las hidroeléctricas por la NPC, pero siempre fue en vano. Sin embargo, el proceso de intervención en tres etapas que emprendió la CAO puede haber contribuido a la actitud generalmente positiva de los habitantes de Ambuklao y Binga entrevistados. En primer lugar, la metodología de negociación y resolución de conflictos alternativa facilitada por la CAO estableció vías de comunicación entre las comunidades y SNAPB, que aparentemente se mantienen hasta la fecha.¹⁵ Los habitantes y autoridades de la comunidad entrevistados sólo tuvieron comentarios positivos sobre los Aboitiz.

Recompensa a los contaminadores y fomenta el monopolio energético

Las comunidades anfitrionas ignoran en gran medida

el objetivo subyacente de la solicitud de registro de las hidroeléctricas en el MDL. Pero SNAPB sí que lo tiene claro: fue en definitiva por el logro de su objetivo fundamental, obtener ganancias; después de todo es un negocio. Solamente con la central de Binga, SNAPB ganará entre 4,6 y 11.6 millones de dólares por concepto de la venta de CER.¹⁶ Se estima que las ganancias que obtendrá de la central de Ambuklao serán más o menos del mismo orden.

Por eso, aunque el registro en el MDL represente un sello de “bondad medioambiental” para SNAPB, se trata en realidad de un mecanismo para que la empresa obtenga más dinero. Es incierto si SNAPB hubiera invertido en los proyectos hidroeléctricos sin el MDL. Sin embargo, lo que queda claro del cronograma del proyecto y los documentos oficiales de diseño del proyecto son sus afirmaciones de que los ingresos generados a través del MDL son esenciales para la viabilidad del proyecto. Estos proyectos MDL contribuirán en promedio menos del 1% de la energía neta generada por fuentes de energía renovable en el país.¹⁷ Esta cifra es incluso más insignificante si se la compara con las cifras de generación de energía eléctrica a base de combustibles fósiles.

De hecho, en conjunto, los dos proyectos hidroeléctricos MDL representan sólo una fracción del portafolio de inversiones del grupo Aboitiz Power Group, el co-propietario filipino de SNAPB: el 42% de la energía que produce proviene de combustibles fósiles, el 30% de grandes represas y el 27% es energía geotermal. Las dos centrales en cuestión corresponden al 13,6% de la capacidad total de generación fiable de energía de Aboitiz.

Lo que queda claro aquí es que mientras se trata de proteger con una mano el medioambiente, con la otra se continúa destruyéndolo.¹⁸ Herbert Docena, un ex investigador de Focus on the Global South realizó una investigación

pormenorizada sobre el MDL en Filipinas y se refirió a él como “incentivos perversos” (en términos económicos), es decir, cuanto mayor es la cantidad de combustibles fósiles que afirman compensar o desplazar de la matriz energética nacional, más ganancias obtendrán de las emisiones reducidas, lo que a su vez les permitirá invertir en más usinas de generación eléctrica en base a combustibles fósiles sucios, y así sucesivamente. Hasta ahí llega su “bondad ambiental”.

Otro gran problema es que el MDL concentra aún más el control monopólico del sector energético nacional en manos de unas pocas familias. Las comunidades anfitrionas de Ambuklao y Binga tampoco saben que los Aboitiz¹⁹ co-propietarios filipinos de SNAPB, se cuentan entre los mayores actores del sector energético nacional. La familia Aboitiz controla la segunda empresa de generación y distribución de energía más grande del país. Como uno de los principales beneficiarios de la privatización del sector energético de Filipinas, más de la mitad de sus ganancias provienen de sus intereses en la energía.

Conclusión: en busca de alternativas y una ciudadanía activa y politizada

Las centrales hidroeléctricas de Ambuklao y Binga son un ejemplo interesante de los nexos entre el control empresarial, la participación de los fondos de la CFI y la CAO, el gobierno y la responsabilidad social empresarial como herramienta para ganar la aceptación social y la legitimación de la empresa y los proyectos MDL en la práctica. Sin embargo, como lo demuestra este estudio de caso, cabe preguntarse si las consultas son significativas cuando hay un desequilibrio tan grande entre las ‘partes interesadas’ en términos de la información que manejan y su comprensión de los temas en cuestión.

Pero la propia ineficacia del gobierno y su transgresión histórica de los derechos de estas comunidades le ha facilitado al sector privado dar un paso al frente y presentarse como una ‘alternativa’ al gobierno, especialmente si la empresa privada ofrece medios de sustento, empleo e incluso dinero. Sin embargo, el nudo del asunto sigue siendo si un proyecto MDL puede realmente hacer la diferencia en términos de sustentabilidad social y ambiental.

La falta de una ciudadanía activa y politizada dificulta incluso más imaginar alternativas y nuevas formas de manejo de los recursos. Esto no significa que las comunidades de Ambuklao y Binga carezcan de capacidad de resistencia al MDL o para pensar en alternativas comunitarias para hacerle frente al cambio climático. Pero para llegar a eso, el primer paso es acortar las brechas de información en términos de lo que realmente hace el MDL, qué es el cambio climático y las políticas gubernamentales. Después de todo, la información es poder. Pero organizar y politizar a los habitantes de Binga y Ambuklao será seguramente una tarea difícil, especialmente contra una empresa que proporciona recursos económicos a la comunidad, aunque sean insignificantes si se los compara con la magnitud de las ganancias que obtiene la empresa. Dicho llanamente, la empresa obtiene decenas de millones por año con la venta de CER, mientras que las comunidades obtienen migajas (relativamente hablando) para “subsidiar” la compra de energía a la empresa y para el desarrollo de la comunidad. Pero tarde o temprano, las comunidades aprenderán quiénes son los que se benefician realmente con los proyectos del MDL. Si las cifras mencionadas anteriormente son una indicación, ciertamente no serán ellos los beneficiados. Esperemos que sea más temprano que tarde.





El río Agno corre a través de las comunidades de Ambuklao y Binga, así que es un recurso muy importante para tomar, para la agricultura y para la energía hidroeléctrica.

- 1 Emiloone West Fianza realizó todas las entrevistas locales. Ella es una investigadora independiente de Ciudad Baguio, Benguet. Todas las entrevistas se realizaron en los idiomas ibaloi e ilokano y las transcripciones se tradujeron al inglés. Las entrevistas se realizaron el 20 de octubre de 2011 en Ambuklao y entre el 22 y el 24 de octubre de 2011 en Binga.
- 2 República de Filipinas, Plan de Desarrollo de Filipinas 2010-2016, Manila: National Economic and Development Authority, 2011, p.313.
- 3 Ibid., pp. 311 (Recuadro 10.3. Susceptibilidad al peligro de las provincias seleccionadas de acuerdo a la incidencia de la pobreza) y 313.
- 4 La adaptación sigue siendo el marco más amplio.
- 5 Resources, Environment, and Economics Center for Studies, Inc. National Environmental Economic and Development Study (NEEDS) for Climate Change, marzo 18, 2010, http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financiamiento/application/pdf/philippines_final_report_needs.pdf, sitio visitado el 13 de octubre de 2011.
- 6 Herbert Docena, *The Clean Development Mechanism Projects in the Philippines: Costly, Dirty, Money-Making Schemes*, Focus on the Philippines Special Reports, Focus on the Global South: Quezon City, junio de 2010.
- 7 Ibid.
- 8 <http://www.focusweb.org/books/cdmphilippinesreport>, sitio visitado el 21 de mayo de 2012.
- 9 Joseph Purugganan, "Chapter 9: Case study of CDM governance in the Philippines" en *Governing climate finance: Critical perspectives from Africa, Asia and Latin America*, editado por Trusha Reddy, ISS Roundtable Report: Ciudad del Cabo, septiembre 1-2, 2010. .
- 10 Plan de Desarrollo de Filipinas, p. 151.
- 11 Binga Hydroelectric Power Plant, Project Design Document Form (CDM PDD) Versión 3, p. 14.
- 12 MIGA es miembro del Grupo Banco Mundial y tiene la misión de promover la inversión extranjera directa en los países en desarrollo para respaldar el crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas, proporcionando seguros al sector privado contra el riesgo político.
- 13 Memorando del acuerdo entre SN Aboitiz Power y la National Power Corporation por la compraventa de la central de energía hidroeléctrica Ambuklao-Binga, 19 de mayo de 2009, Ciudad de Baguio.
- 14 Entrevista con el abogado Michael Hostillos, Octubre 20, 2011.
- 15 Ramon Capsula, la autoridad local, comunica directamente a SNAPB las inquietudes de la comunidad. Fue parte del proceso de intervención de la CAO.
- 16 Ver anexo 1: Cálculo de los ingresos aproximados por el MDL en Filipinas, en Herbert Docena, *The Clean Development Mechanism Projects in the Philippines: Costly Dirty Money-making Schemes*, pp. 90-91.
- 17 En base a los datos de 2003-2005 provistos por SNAPB en el documento de diseño del proyecto. La central de Binga generará en promedio 61.349,71 MW/h en el primer período de evaluación de 7 años; mientras que la central Ambuklao generará 44.349,2 MW/h en promedio desde 2011 a 2017. La generación de energía neta total promedio de energía renovable para el período 2003-2005 fue de 13.310.199 MW/h.
- 18 Germelina Lacorte, "Big power firms cashing in on CDM while destroying environment" informe en MindaNews, diciembre 2, 2010. Disponible en <http://www.mindanews.com/top-stories/2010/12/02/big-power-firms-cashing-in-on-cdm-while-destroying-environment-report/> y visitado el 27 de abril de 2012.
- 19 La familia Aboitiz está compuesta por Jon Ramon Aboitiz y su familia y Enrique Aboitiz y su familia. Sus demás negocios están relacionados con la propiedad inmobiliaria, industrias pesadas, la construcción, el transporte, la banca y otros. Muchos de estos son consideradas industrias sucias.

MDL en Tailandia: Perspectivas y experiencias a nivel de la comunidad

Focus on the Global South y el
Thai Working Group for Climate Justice
Enero 2012

Introducción

Aunque la cantidad de proyectos del mecanismo de desarrollo limpio (MDL) en Tailandia que ya están recibiendo certificados de emisiones reducidas (CER) y están comerciando bonos de carbono es limitada, muchas personas, especialmente políticos, consideran al MDL como una posible vía para generar ingresos a nivel nacional y estimular la transferencia de tecnología, fortaleciendo de esta forma la capacidad del país de reducir las emisiones, y hasta cierto punto, de adaptarse al cambio climático. El sector empresarial considera al MDL como una fuente prometedora de nuevos ingresos que también puede proporcionarles a las empresas una imagen positiva.^{1 2}

Sin embargo, no se debe olvidar que el objetivo central del MDL (uno de los mecanismos flexibles según el régimen del Protocolo de Kioto) es ayudar a lograr una reducción general de los gases de efecto invernadero de manera más eficiente. Se cree que el mercado es un mecanismo eficaz para emparejar la oferta y la demanda de bonos de carbono entre los países desarrollados y en desarrollo, lo cual estimulará las “actividades de reducción de gases de efecto invernadero” al mismo tiempo que se promueve un desarrollo “limpio” y “sustentable”. Por lo tanto, la evaluación del MDL depende en gran parte de si conlleva o no una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente si se lo compara con otros mecanismos que no son de mercado. Además, otros factores clave para medir el éxito del mecanismo incluyen distintos aspectos de “desarrollo sustentable” y cómo y a quién se distribuyen los beneficios de los proyectos MDL.

El presente documento consta de dos partes: La primera explica la situación y las tendencias del MDL en Tailandia, y la segunda contiene estudios de casos de proyectos MDL cuyo objetivo es identificar los efectos positivos y negativos a nivel de la comunidad.

PARTE 1

Situación y tendencias del MDL en Tailandia

Para una implementación sistemática y eficiente del MDL, el 6 de julio de 2007 se estableció el Organismo de Gestión de los Gases de Efecto Invernadero de Tailandia, o TGO. Su mandato es promover, analizar y monitorear los proyectos MDL en Tailandia. En su condición de autoridad nacional designada para la implementación del MDL según el régimen del Protocolo de Kioto, el TGO está autorizado a emitir Cartas de Aprobación, uno de los documentos necesarios para inscribir proyectos MDL ante el Directorio Ejecutivo del MDL. Para decidir si un proyecto cumple las condiciones para obtener la Carta de Aprobación o no se tienen en cuenta un conjunto de criterios de desarrollo sostenible³ establecidos por el TGO. Estos criterios se clasifican en cuatro categorías principales con 24 indicadores:

1. Categoría recursos naturales y medioambiente: medioambiente (reducción de gases de efecto invernadero,

contaminación) y recursos naturales (manejo de los recursos hídricos, eficiencia en el uso del agua, erosión del suelo y la costa, ampliación de áreas verdes, etc.).

2. Categoría social: participación pública, desarrollo social y cultural, salud de los trabajadores y las comunidades
3. Categoría desarrollo y transferencia de tecnología: desarrollo de tecnología, planes luego del período de acreditación, desarrollo de recursos humanos.
4. Categoría economía: generación de fuentes de trabajo, aumento de los ingresos de las partes interesadas, uso de energías renovables, eficiencia energética, uso de materiales nacionales.

Para cada indicador, se califica al proyecto de (-1) a (+2); y para obtener la carta de aprobación, el proyecto debe recibir una calificación agregada positiva en cada categoría para garantizar que contribuye al desarrollo sostenible del país.

Al 28 de septiembre de 2011, el TGO había otorgado 146 cartas de aprobación destinadas a proyectos MDL. De estos, 55 proyectos ya están registrados ante el directorio del MDL y siete de estos proyectos registrados ya han emitido certificados de emisiones reducidas (CER).⁴ Se puede dividir a los 146 proyectos MDL en dos categorías teniendo en cuenta sus impactos potenciales en el lugar donde está ubicado el proyecto. Un grupo está formado por los proyectos MDL que tienen que ver con la mejora de operaciones existentes (mejora interna) donde los posibles ingresos de los bonos de carbono serían un incentivo para que las industrias instalen tecnologías necesarias para mejorar el desempeño o eficiencia de sus actividades. Por ejemplo, las plantas de procesamiento de mandioca que producen aguas residuales con alto contenido orgánico y le causan problemas a las comunidades locales pueden ser incentivadas por (los ingresos derivados de la venta de bonos de carbono de) el MDL a instalar sistemas de tratamiento de aguas residuales (reduciendo las emisiones) y unidades de generación de electricidad asociadas (energía de fuentes distintas a los combustibles fósiles).

El segundo grupo está formado por proyectos MDL que implican actividades industriales totalmente nuevas como las usinas de generación eléctrica que utilizan biomasa/cáscara de arroz. Estos proyectos conllevan más riesgos de generación de impactos en el lugar donde están ubicados.

Actualmente, de los 146 proyectos que obtuvieron la carta de aprobación del TGO, 21 son proyectos de biomasa y 14 de ellos producen energía a partir de la cáscara de arroz.

Problemas relacionados con la ubicación de los proyectos y su proximidad a las comunidades

Es evidente tras la investigación de mapeo⁵ de la ubicación de los proyectos que hay una tendencia general a ubicar las centrales de biomasa lo más cerca posible de las fuentes de materias primas, por conveniencia y para ahorrar en gastos de transporte y logística. Por lo tanto es difícil evitar localizarlos cerca de comunidades, debido a la disponibilidad de la infraestructura necesaria. Además, los materiales de biomasa que se utilizan son en general residuos de las actividades agrícolas de las comunidades. En ese sentido, es inevitable la inquietud de las comunidades respecto a los impactos de las usinas en su salud, medioambiente y sociedad, especialmente en los casos de usinas que utilizan biomasa a gran escala, ya que muy probablemente impliquen la presencia de polvo y la contaminación del aire.

Deficiencias de las prácticas y el sistema vigente de protección ambiental

Según la ley de Conservación y Protección Ambiental B.E. 2535 (A.D. 1992), las usinas de energía que generen 10 o más megavatios de electricidad deben realizar una evaluación de impacto ambiental (EIA) con audiencias públicas. Cualquier proyecto de usina de generación eléctrica que utilice biomasa, ya sea en el marco del MDL o no, debe cumplir con este requisito obligatorio. Sin embargo, algunos proyectos intentan claramente eludirlo indicando que su capacidad es un “poco menor”, es decir de 9 a 9,9 MW en lugar de 10 MW. Lo mismo ocurre con algunos proyectos

Usinas de generación eléctrica que utilizan biomasa y ya obtuvieron cartas de aprobación del TGO*	Proyectos
Usinas de biomasa a base de cáscara de arroz	14
Usinas de biomasa a base de bagazo y desechos de la caña de azúcar	4
Usinas de biomasa a base de residuos de palma aceitera y de la industria del aceite de palma	3

* Fuente: 28 de septiembre de 2011, www.tgo.or.th



de usinas de generación que utilizan cáscara de arroz como biomasa. Se está debatiendo el significado de la diferencia de 0,1 a 1 MW en la capacidad de las usinas y el alcance de sus impactos, correlativamente con la necesidad de realizar una evaluación adecuada de los impactos y una audiencia pública antes de aprobar un proyecto.

Por ejemplo, 9 de los 21 proyectos MDL de usinas de generación eléctrica a base de biomasa que ya obtuvieron la carta de aprobación del TGO son usinas con capacidad de generación de entre 9 y 9,9 MW, y por eso la ley no las obliga a realizar un EIA ni una audiencia pública. Esto es claramente una deficiencia del sistema de protección ambiental tailandés. Sin embargo, en el caso de los proyectos MDL, para obtener la carta de aprobación, éstos tienen que cumplir una serie de criterios de desarrollo sostenible establecidos por el TGO. Por lo tanto, las deficiencias del sistema de protección ambiental tailandés deberían en esos casos, al menos en principio, solucionarse para que la salud y el medioambiente de las comunidades no esté en riesgo. Analizaremos este tema en especial en la segunda parte del documento.

Materiales de biomasa y valores económicos

It can be argued that the operation of biomass power plants is promoting the efficient. Podría argumentarse que el funcionamiento de usinas de generación eléctrica a base de biomasa promueve el uso eficiente de los subproductos de la industria agrícola y genera un valor adicional para tales materiales. Sin embargo, algunos de esos materiales pueden ser asimismo de valor para otros usos. Las cáscaras de arroz, por ejemplo, son útiles en muchas actividades agrícolas (como la fertilización y mantenimiento de la humedad del suelo) y quemarlas como fuente de energía para usinas de generación de electricidad debería por lo tanto compararse con otros valores económicos. Además, la gran demanda actual de cáscara de arroz en Tailandia ha conllevado un aumento de su precio y una escasez de la oferta, que podría obligar a algunas usinas que utilizan las cáscaras de arroz/biomasa como combustible, a buscar otros materiales sustitutos como la madera o las astillas de madera, con mayores impactos ambientales que los previstos originalmente.⁶

Contribución de los proyectos MDL a la reducción de emisiones en Tailandia

El debate sobre cómo y cuánto contribuyen los proyectos MDL a la reducción total de emisiones en Tailandia continúa pendiente. Los 146 proyectos MDL que obtuvieron cartas de aprobación (a 2011) reivindican reducciones de 8,79 millones de toneladas de CO₂ equivalente por año. Sin embargo, ese volumen es muy bajo en comparación con las emisiones totales de gases de efecto invernadero del país, que ascendían a 367 millones de toneladas de CO₂ equivalente en 2005 (los datos oficiales disponibles más recientes).⁷ En ese sentido, deberían tenerse en cuenta otros mecanismos legales o instrumentos económicos como los impuestos, leyes o el establecimiento de topes para lograr una mayor reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, al tratarse de proyectos MDL, la cantidad de emisiones reducidas no deberían contarse como reducción de las emisiones de Tailandia (al menos durante el período del proyecto MDL), ya que los compradores de bonos de

carbono ya las contabilizan como tales a su cuenta - de otra manera significaría contabilizarlas dos veces.

Ventajas económicas 'adicionales' – siguen siendo cuestionables

Además de beneficiar directamente a los dueños del proyecto, sigue siendo difícil probar cómo los proyectos MDL benefician al país en general, y hasta qué punto promueve el MDL el uso de energías renovables a nivel nacional. En el caso de Tailandia, el crecimiento de la energía renovable está asociado en gran medida al sector agrícola (como fuente de materia prima barata), y la alta tasa de crecimiento de los proyectos de generación de energía con biomasa y biogás no muestra ninguna correlación con la cantidad de proyectos MDL. Las estadísticas oficiales revelan que la capacidad combinada actual de generación de energía con biomasa equivale a 1.751,86 MW,⁸ de los cuales sólo 236,71 MW (o el 13,51 %) corresponde a proyectos MDL.



Por otra parte, el Plan de Desarrollo de Energía Alternativa oficial: AEDP 2012-2021 establece como meta aumentar la capacidad total de generación de energía con biomasa a 3.631 MW para 2012 –sin embargo, de todas las estrategias identificadas en el plan para lograr esa meta (usando por ejemplo tarifas promocionales de introducción garantizadas, conocidas como *Feed-In Tariff* en inglés) no se encuentra por ningún lado el MDL o los bonos de carbono.⁹ Es importante destacar que Tailandia tiene un sistema de incentivos a las usinas de energía renovable para que le vendan energía a la red (el precio promocional de compra depende del tipo de combustible renovable). Esto podría significar que ya hay suficientes incentivos para este tipo de proyectos, y que la ganancia financiera del MDL (es decir el dinero obtenido por la venta de bonos de carbono) no es el principal factor que impulsa el desarrollo de estos proyectos. En una conferencia organizada por el TGO,¹⁰ un operador de un proyecto MDL destacado dijo que los “bonos de carbono son como una ganancia extra, ya que la venta de electricidad del proyecto también se beneficia de la tarifa promocional subsidiada por el Estado”.

PARTE 2: Estudios de caso de dos proyectos MDL de usinas de generación eléctrica a base de biomasa/cáscara de arroz¹¹

CASO 1: A.T. Biopower, provincia de Pichit. Propietario/desarrollador del proyecto: A.T. Biopower Co., Ltd.

Esta usina de generación de electricidad a base de cáscara de arroz está ubicada en la provincia de Pichit. Obtuvo la carta de aprobación el 30 de enero de 2007, y el 18 de junio de 2007 quedó registrada ante el directorio del MDL. Es uno de los primeros siete proyectos MDL de Tailandia en estar registrado ante el directorio del MDL y el primero en recibir, el 4 de junio de 2008, certificados de emisiones reducidas (CER) por 77.292 toneladas de CO₂ equivalente por año. Esta central eléctrica tiene una capacidad de generación de 22 MW y su evaluación de impacto ambiental (EIA) fue aprobada en el marco de la ley tailandesa.¹² EL EIA indicó que los impactos del proyecto serían mínimos o que se mantendrían en todo caso dentro de los estándares ambientales aceptados en Tailandia. La usina se alimentaría con cáscara de arroz (el combustible) procedente de distintos lugares; al respecto, el EIA también indicó que se utilizarían 40 camiones por día para transportar las cáscaras de arroz

necesarias hasta la usina, y concluyó que eso no afectaría a las comunidades.¹³

Sin embargo, la realidad pone en evidencia diferencias con las conclusiones del EIA. Las comunidades que viven cerca de la usina han informado de la presencia de problemas relacionados con el polvo luego que la planta comenzó a funcionar. Se observó durante la visita de campo que las casas cercanas a las instalaciones tenían que cerrar las puertas y ventanas en todo momento para evitar que se acumulara demasiado polvo en su interior. Además, el líder de la comunidad señaló que la “contaminación con polvo la provocan los camiones que llevan la cáscara de arroz hasta la usina”.¹⁴ Esto no coincide con lo que dice el EIA, que concluye que el transporte del material no afectaría a las comunidades.

En las comunidades locales surgieron conflictos asociados a la instalación de la usina, incluso antes que empezara a funcionar. Las comunidades estaban divididas entre quienes apoyaban su instalación y quienes se oponían a ella. Se reveló que los conflictos se originaron a causa de la diferencia en los beneficios (o impactos) que recibirían del proyecto. Aunque se organizó una audiencia pública, en ella también participaron muchas personas que no vivían cerca del proyecto, sino en sub-districtos de las inmediaciones. Además, la participación en la audiencia pública fue selectiva; la mayoría de los invitados fueron personas que ya habían manifestado su respaldo al proyecto.¹⁵

Por otra parte, el Consejo Nacional de Políticas Energéticas establece que las usinas de energía que estén contratadas para vender más de 6 MW de electricidad a la red nacional deben crear un fondo de desarrollo comunitario (FDC)¹⁶ para mejorar la calidad de vida y el medioambiente de los miembros de las comunidades y las áreas afectadas alrededor de las usinas. La usina de *AT Biopower Co. Ltd* en Pichit estableció un FDC el 11 de enero de 2008 que está presidido por el jefe del distrito.

Inicialmente, el fondo apoyaba siete sub-districtos de dos districtos que tienen áreas adyacentes a la usina. Esta práctica de distribución de fondos ha recibido críticas porque incluye a comunidades que no están cerca de la usina, sino que solamente comparten fronteras administrativas con los districtos adyacentes a la misma. Además, se le ha facilitado el acceso al FDC especialmente a quienes forman parte del comité de gestión del Fondo y su círculo íntimo.¹⁷ Hay

una propuesta de la comunidad para que se les dé prioridad a quienes viven cerca de la usina (es decir, a las personas directamente/severamente afectadas) y para que se tengan en cuenta las distancias entre la usina y las comunidades, en lugar de las fronteras administrativas. Además, “la información y reglamentación sobre cómo distribuir el fondo deben ser públicas, y los desembolsos deben realizarse según la gravedad de los impactos padecidos por el funcionamiento de la usina”.¹⁸

CASO 2: Usina Buasommai I de generación eléctrica a base de biomasa en el distrito de Muang Roi-Et. Propietario/desarrollador del proyecto: Buasommai Electricity Generating Co., Ltd.

Esta usina de energía a base de biomasa/cáscara de arroz genera 9,9 MW de electricidad. El proyecto obtuvo el 16 de febrero de 2011 la carta de aprobación del TGO. Su inscripción ante

el directorio del MDL¹⁹ continúa pendiente.²⁰ La usina está ubicada aproximadamente a dos kilómetros del centro de la provincia de Roi-Et en Moo 10 del sub-distrito Nua Mueng en el distrito de Muang (el centro de la provincia). En el sitio de la usina hay un molino arrocero de propiedad del mismo grupo empresarial, que ha estado en funcionamiento desde 1998. En 2008 se inició la construcción adicional de la usina de generación eléctrica a bases cáscara de arroz/biomasa.

Desde el principio, la mayoría de las comunidades alrededor de las instalaciones no estuvieron de acuerdo con el establecimiento del molino y se opusieron a su construcción. Cuando el molino arrocero comenzó a funcionar, las comunidades empezaron a padecer problemas ambientales tales como el aumento del polvo y de aguas residuales, y problemas de salud crecientes, como irritación de los ojos y la piel (la cantidad de pacientes con estos síntomas se ha duplicado en el centro de salud de la localidad).²¹ Estos problemas persisten, especialmente desde que comenzó a funcionar la usina, construida más recientemente. Los pobladores observaron mayor presencia





de polvo y una intensificación de los problemas de salud. Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho ningún estudio sistemático para cuantificar hasta qué punto son atribuibles los problemas al molino arrocero y hasta qué punto son consecuencia de la usina adicional de generación eléctrica a base de cáscara de arroz/biomasa.

Durante la construcción de la usina Buasomma I, a algunos líderes de la comunidad se les organizaron visitas a otras usinas de energía que utilizan biomasa, aunque fueron criticadas porque muy pocas las personas invitadas. Como testificó el líder de la comunidad, “la visita se centró principalmente en el lado positivo del proyecto y sus procesos y estándares; se discutió mucho menos sobre los posibles impactos negativos”.²² Además, el desarrollador del proyecto hizo énfasis en las posibilidades de generación de empleo del proyecto, diciendo que muchos cargos se abrirían para los miembros de la comunidad local. Sin embargo, en la práctica eso no ocurrió. El funcionamiento de la usina exige conocimientos y habilidades específicos, que requieren como mínimo personas con educación terciaria; este ha sido el

principal obstáculo para la gente de las comunidades. “Muy pocas personas de la localidad pudieron conseguir empleo en la usina, para nosotros sólo hay trabajo en el molino de arroz, no en la usina”.²³

Un punto interesante es que, según los pobladores, los foros públicos que organizó la empresa para las comunidades no mencionaron que el proyecto sería parte de un mercado mundial de carbono con el potencial de generar ingresos adicionales.²⁴ Esto demuestra que el desarrollador del proyecto no les proporcionó a las comunidades locales información integral, particularmente sobre el MDL.

De conformidad con las disposiciones del Consejo Nacional de Políticas Energéticas, se estableció un Fondo de Desarrollo Comunitario para las comunidades ubicadas en torno a la usina de energía a base de biomasa Buasomma I en Roi-Et. Las tres aldeas más próximas a la usina deberían ser las principales beneficiarias de los fondos, puesto que su cometido es ayudar a las personas afectadas y promover el desarrollo sostenible de las comunidades. Sin embargo, se lo

ha criticado porque “el apoyo a las comunidades se imparte solamente como caridad y no responde a las necesidades prioritarias”.²⁵ Las quejas y reclamos de las comunidades son manejados con total informalidad. Por ejemplo: las comunidades solicitaron más personal médico para ayudar a identificar las causas de las enfermedades de las personas, pero no obtuvieron respuesta, y en su lugar la empresa utilizó el fondo (150.000 THB) para construir un edificio para un proyecto comunitario de hierbas medicinales.²⁶

Ante la situación planteada en el caso Buasomma (un molino arrocero y una usina de generación eléctrica en base a biomasa ubicadas en el mismo lugar) en Roi-Et, las comunidades propusieron que para reducir los conflictos, aumentar la confianza y mejorar los estándares de funcionamiento de los proyectos, previo a su aprobación se les debería exigir a los proyectos un análisis cuidadoso de cualesquier otros componentes/actividades asociados ubicados en el mismo lugar, que podrían afectar

potencialmente a las comunidades o exacerbar los impactos que ya sufren, por ejemplo, en este caso, del molino de arroz. Además, se debería organizar un monitoreo continuo del funcionamiento de la usina para garantizar el cumplimiento de los estándares requeridos y propuestos.²⁷

Resumen de los estudios de casos

Los impactos sociales, económicos y ambientales de los proyectos MDL (usinas de generación eléctrica a base de biomasa/cáscara de arroz) se resumen de la siguiente manera:

1. Los conflictos se intensificaron y la participación de las comunidades ha sido problemática

Los conflictos empezaron incluso antes que los proyectos comenzaran a funcionar; las comunidades se dividen entre quienes los respaldan y quienes los





rechazan. Este tipo de problema es frecuente, pero la pregunta es si los operadores del proyecto intensifican el conflicto al involucrar intencionalmente y recompensar a determinados grupos selectivos, especialmente a quienes se muestran proclives a respaldar los proyectos. Por ejemplo, una cantidad desproporcionadamente alta de personas que no viven cerca de las usinas fueron vistas en ambos casos participando en el proceso de consultas, dando lugar a que surjan inquietudes acerca de la legitimidad de los procesos.

Este problema podría subsanarse si los propietarios del proyecto y las instituciones competentes garantizaran procesos de participación pública y toma de decisiones justos y transparentes. Además, debería dárseles prioridad a los grupos que viven más cerca de los proyectos, es decir, a quienes serían/son los más directamente afectados por las actividades del proyecto. Determinar quiénes son las partes interesadas a efectos de la participación pública en base a fronteras administrativas implica incluir a muchas personas que viven lejos y no están directamente afectadas por los proyectos, y que por eso pueden tener potencialmente opiniones e impresiones más positivas sobre los proyectos. De todas maneras, es

importante destacar que ni el propietario del proyecto ni las instituciones competentes como el TGO han hecho ningún esfuerzo para mejorar el proceso a fin de mitigar el conflicto.

2. La información ofrecida para la toma de decisiones por las comunidades era incompleta

Queda claro de las entrevistas y del informe de consulta pública²⁸ que la información que brindan los promotores del proyecto generalmente está sesgada hacia aspectos positivos de los proyectos, mientras que las comunidades afectadas por los proyectos se quejan de la falta de discusión de los efectos potencialmente negativos. Contar con información incompleta es un problema para una toma de decisiones informada. Es esencial que los posibles impactos negativos de las actividades de los proyectos sean debatidos con las comunidades locales, y que se brinde especialmente la información necesaria para establecer mecanismos de monitoreo y medidas de mitigación efectivos. Un dato interesante aquí es que la información sobre los posibles beneficios de los bonos de carbono/mercado de carbono (en el caso de proyectos MDL), y sobre

cuáles son los elementos centrales de los proyectos, fue considerada como irrelevante por los desarrolladores de los proyectos y las instituciones competentes; en consecuencia, esas informaciones no estuvieron bien elaborados o incluso ni siquiera fueron debatidas con los miembros de las comunidades.²⁹ Por lo tanto, los miembros de las comunidades no tienen prácticamente ninguna información ni comprensión acerca de los bonos de carbono que se obtienen con los proyectos, lo que limita su capacidad de negociación sobre la distribución de beneficios de los ingresos generados por esa vía del carbono.

3. Los efectos económicos positivos para las comunidades locales son inciertos

Buasommaí había prometido que su usina de energía generaría muchas fuentes de trabajo para la población local; esa promesa no se ha cumplido. La razón esgrimida es que la población local no tenía la calificación suficiente para ocupar cargos en la usina debido a su bajo nivel de educación y a que carecían de las habilidades necesarias.

De otra parte, el aumento del precio de la cáscara de arroz, y el consiguiente incremento de los ingresos de los cultivadores de arroz, fue la consecuencia de un aumento general de la demanda de cáscara de arroz en todo el país, y no puede atribuírsele directamente a los proyectos MDL en estas zonas. El aumento acelerado en el precio de la cáscara de arroz fue el resultado del incremento exponencial en la cantidad de usinas de generación eléctrica a base de biomasa (la mayoría de ellas no registradas como MDL) en todo el país en los últimos años.

Además, los Fondos de Desarrollo Comunitario a ser distribuidos entre las comunidades afectadas ya son un requisito exigido por leyes nacionales vigentes, y por ende los beneficios de los Fondos no son atribuibles a que estos proyectos se sumen al MDL: los Fondos se establecerían de todas formas, con o sin el MDL y las rentas de los bonos de carbono. No es obligatorio para el propietario del proyecto usar ingresos generados por la venta de bonos de carbono para financiar



el Fondo de Desarrollo Comunitario ni ninguna iniciativa de apoyo a las comunidades locales. Por lo tanto, el dinero de la venta de bonos de carbono es un ingreso extra prácticamente sin ninguna condición para la empresa. Es más, ni siquiera se le exige a la usina que suministre electricidad a bajo costo para las comunidades aledañas.

En resumen, todavía no es posible identificar efectos económicos positivos de estos dos proyectos MDL para las comunidades locales.

4. Los impactos ambientales de los proyectos MDL persisten

Los problemas ambientales, la contaminación y los impactos a la salud de las comunidades provocados por estos dos proyectos han sido evidentes, a pesar del hecho que uno de ellos se sometió al proceso de evaluación de impacto ambiental y recibió CER, y el otro obtuvo la carta de aprobación. Las comunidades afectadas señalaron que estos problemas siguen siendo severos y que no se los ha enfrentado sistemáticamente hasta la fecha.

Conclusión

Los proyectos MDL que han obtenido cartas de aprobación deberían, al menos en teoría, garantizar mejores estándares ambientales y de sustentabilidad que los proyectos convencionales. Sin embargo, del análisis de los estudios de caso resulta evidente que estos proyectos MDL no han significado beneficios cuantificables adicionales para las comunidades locales, y que siguen causando problemas sociales, económicos y ambientales similares a los de otros proyectos que no califican como MDL.

Esta situación sugiere que el TGO debería reformar sus criterios de desarrollo sostenible y el proceso de aprobación de proyectos, y establecer mecanismos de monitoreo de los proyectos MDL que ya están en funcionamiento; especialmente poniendo a las comunidades más afectadas en el centro y respetando los principios de transparencia, participación y justicia. De otro modo, el dinero del MDL obtenido de la venta de los bonos de carbono no beneficiará a la sociedad –por el contrario, este nuevo tipo de financiamiento agravará aún más los problemas sociales y ambientales, al menos a nivel de la comunidad.

- 1 A.T. Biopower, http://www.atbiopower.co.th/index_e.htm Sitio visitado el 20 de febrero de 2012.
- 2 Buasommai Group, <http://buasommaigroup.com/th/electricity/> Sitio visitado el 20 de febrero de 2012.
- 3 Organismo de Gestión de los Gases de Efecto Invernadero de Tailandia (TGO). Criterios de desarrollo sostenible. http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=105:cdm-sd-criteria&catid=59:national-approval-&Itemid=12 Sitio visitado el 11 de mayo de 2011.
- 4 Organismo de Gestión de los Gases de Efecto Invernadero de Tailandia (TGO). Situación de los proyectos MDL en Tailandia. http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&view=category&id=60&Itemid=13 Sitio visitado el 28 de septiembre de 2011.
- 5 Organismo de Gestión de los Gases de Efecto Invernadero de Tailandia (TGO), Ubicación de los proyectos MDL en Tailandia, http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=111:project-map&catid=60:thailand-cdm-projects&Itemid=92
- 6 Sodsai Sawang-sok, 'Biomass Power Plant: Doing Bad in order to be Good', <http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=1306>
- 7 Oficina de Recursos Naturales y Política y Planificación Ambiental, Plan Maestro Nacional sobre Cambio Climático 2010-2019, Borrador, noviembre de 2009.
- 8 Departamento de Desarrollo y Eficiencia Energética Alternativa, Ministerio de Energía, <http://www.dede.go.th/dede/>
- 9 Plan de Desarrollo de Energía Alternativa: AEDP 2012-2021), Ministerio de Energía, <http://www.dede.go.th/dede/images/stories/aedp25.pdf>
- 10 Natee Sithiprasat, presentación en la conferencia 'Bonos de carbono: Una nueva commodity que genera ingresos para el país', co-organizada por el Organismo de Gestión de los Gases de Efecto Invernadero de Tailandia (TGO) y la Asociación de Bancarios de Tailandia, en el Siam City Hotel, Bangkok, 5 de julio de 2010.
- 11 La encuesta de campo fue realizada por el Sr. Natthawut Uppa durante un período de ocho días entre el 30 de abril y el 26 de julio de 2011. El área estudiada comprende los casos seleccionados en tres provincias: 3 pueblos (Baan Nongnasarng Moo10, Baan Nongmuang Moo12, y Baan Nongbuathong Moo13) del distrito Muang en la provincia de Roi-et; en los sub-distritos Horkrai y Nernmakork del distrito Bangmoonark en la provincia de Pichit; y en el sub-distrito Namsong del distrito Payuhakeeree en la provincia de Nakhonsawan.
- 12 A.T. Biopower Co., Ltd., Environmental impact management. http://www.atbiopower.co.th/power_plant/power_plant_khomun_t.htm Sitio visitado el 22 de mayo de 2011.
- 13 A.T. Biopower Co., Ltd., Environmental impact management. http://www.atbiopower.co.th/power_plant/power_plant_khomun_t.htm Sitio visitado el 22 de mayo de 2011.
- 14 Sakon Malavej, maestro de escuela y líder de la comunidad, distrito de Bangmoonark en la provincia de Pichit, entrevistado el 24 de julio de 2011.
- 15 Thanathep Wanboon, miembro del comité del pueblo, distrito de Bangmoonark en la provincia de Pichit, entrevistado el 25 de julio de 2011.
- 16 El Fondo de Desarrollo Comunitario para mejorar de manera sostenible la calidad de vida y el medioambiente de las comunidades en el entorno de las usinas. http://www.eppo.go.th/cdf/about_cdf.html Sitio visitado el 22 de junio de 2011.
- 17 Thanathep Wanboon, miembro del comité del pueblo, distrito de Bangmoonark en la provincia de Pichit, entrevistado el 25 de julio de 2011.
- 18 Sakon Malavej, maestro de escuela y líder de la comunidad, distrito de Bangmoonark en la provincia de Pichit, entrevistado el 24 de julio de 2011.

- 19 Organismo de Gestión de los Gases de Efecto Invernadero de Tailandia (TGO). Implementación de los Proyectos MDL. http://www.tgo.or.th/index.php?option=com_content&view=category&id=39&Itemid=46 Sitio visitado el 11 de mayo de 2011.
- 20 La primera versión del PDD fue presentada en enero de 2003 al directorio del MDL y desde entonces se le pidió modificarlo dos veces, en julio de 2005 y en diciembre de 2006. La última versión del PDD (v03), disponible en el sitio web de la CMNUCC indica el mes de octubre de 2007 como fecha de inicio de la construcción. El último PDD está disponible en: <http://cdm.unfccc.int/filestorage/8/9/E/89E1KUBYT4FD0NHSVQCJ2ZWXM573RL/PDD%20Buasomma%20I%20biomass%20power%20plant%20at%20Muang%20Roi%20Et%20district.pdf?>
- 21 Thitawat Pratakam, maestro y líder comunitario, Bann Nong Na Sarng, distrito de Muang, provincia de Roi-Et, entrevistado el 18 de julio de 2011.
- 22 Apichat Polpisan, Jefe del pueblo, Bann Nong Na Sarng, distrito de Muang, provincia de Roi-Et, entrevistado el 17 de julio de 2011.
- 23 Thonglor Chompubute, líder de la comunidad, Bann Nong Na Sarng, distrito de Muang, provincia de Roi-Et, entrevistado el 17 de julio de 2011.
- 24 Thonglor Chompubute, líder de la comunidad, Bann Nong Na Sarng, distrito de Muang, provincia de Roi-Et, entrevistado el 17 de julio de 2011.
- 25 Thitawat Pratakam, maestro y líder comunitario, Bann Nong Na Sarng, distrito de Muang, provincia de Roi-Et, entrevistado el 18 de julio de 2011.
- 26 Thitawat Pratakam, Bann Nong Na Sarng, distrito de Muang, provincia de Roi-Et, entrevistado el 18 de julio de 2011.
- 27 Apichat Polpisan, Jefe del pueblo, Bann Nong Na Sarng, distrito Muang, provincial Roi-Et, entrevistado el 17 de julio de 2011
- 28 A.T. Biopower Co., Ltd., Informe de Consulta Pública. http://www.atbiopower.co.th/power_plant/power_plant_chumchon_t.htm Sitio visitado el 17 de febrero de 2011.
- 29 Documento de Diseño del Proyecto (PDD), usina Buasomma I en el distrito de Muang Roi-Et. http://cdm.unfccc.int/filestorage/8/9/E/89E1KUBYT4FD0NHSVQCJ2ZWXM573RL/PDD%20Buasomma%20I%20biomass%20power%20plant%20at%20Muang%20Roi%20Et%20district.pdf?t=ZE8bHpvbjEyfDAovT_ucMJK3dtDqubdWk0X Sitio visitado el 20 de febrero de 2012.

Infractor reincidente: La usina de energía CGPL de Tata y su sed de bonos del MDL

Un estudio de caso en Gujarat, India¹
Focus on the Global South
Enero 2012

Presentación

El uso de energía es una medida razonablemente precisa para determinar el nivel de crecimiento y desarrollo económico. Desde el advenimiento de las reformas económicas de 1991 y una era resultante con altas tasas de crecimiento, la capacidad energética de la India prácticamente se ha triplicado, de alrededor de 65.000 MW de capacidad instalada en 1991 a 181.558 MW en agosto de 2011.² El Gobierno de la India (GoI) claramente pretende recorrer el camino del alto crecimiento sumado al aumento exponencial de la capacidad energética como modelo de desarrollo para las próximas décadas. La Política Energética Integrada (IEP, por su sigla en inglés) del GoI toma como punto de partida esa senda trazada y predice que se cuadruplicará la capacidad actual hasta unos colosales 800.000 MW para el 2030.³

Este incremento de la capacidad implica la construcción de cientos de proyectos hidroeléctricos y térmicos a carbón y un número considerable de centrales nucleares en todo el país. A partir de un examen de documentos de políticas tales como la IEP, es evidente que a pesar de reconocer la necesidad de una diversificación de recursos energéticos y una transición hacia los renovables, el carbón seguirá siendo el sostén energético de la India para el futuro previsible. Los datos de 2010 del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques indican que aprobó entre 150 y 173 usinas de generación eléctrica a carbón. Un informe reciente del grupo *Prayas Energy* estima que los proyectos térmicos a carbón que se encuentran en proceso de preparación propician un asombroso incremento del 600% de la capacidad de generación a carbón que ronda actualmente los 113.000 MW.⁴

La sed de energía y alto crecimiento del PBI es más evidente en el estado de Gujarat al oeste de la India. Su polémico Primer Ministro Narendra Modi (acusado de complicidad en los disturbios religiosos de 2002 donde perdieron la vida más de mil musulmanes e hindúes) detenta el poder desde 2001. Datos del gobierno estadual indican que su tasa media de crecimiento anual ha sido de 10.4% en los últimos cinco años (el promedio de la India es de 8.3%), y que Gujarat aporta cerca del 16% de la producción industrial del país.⁵ Bajo el mando de Modi, Gujarat ha experimentado un estado de híper industrialización. Ese estado aporta el 51% de la industria química, el 62% de la petroquímica y el 65% de la industria plástica en la economía de la India, y genera el 22% de las exportaciones de la India con solo el 5% de la población y el 6% del área geográfica.⁶ *'Vibrant Gujarat'* (Gujarat vibrante), el evento que oficia como vitrina de exhibición de Gujarat para atraer inversiones ya va por su 5º año, y en la pasada edición de enero de 2011 se firmaron 7.936 memorandos de entendimiento (MoU por su sigla en inglés) por un valor de Rs. 20.83.000 crore de rupias (USD 450 mil millones). Aunque mucho de esto quizás no dé frutos en los próximos años (dado el panorama actual desolador de la economía mundial), incluso una fracción de esa cantidad como inversión real representa un monto verdaderamente asombroso.

El proyecto de industrialización de Gujarat se basa en la energía y la infraestructura. Este estado pretende contar con energía excedente para el 2020 y tiene sancionados

innumerables proyectos energéticos para aumentar su capacidad instalada total actual de 11.636 MW (cifras de 2009). El gobierno pretende explotar el potencial de energía térmica, de gas, geotérmica, nuclear, eólica y solar del estado a cabalidad.

Región de Kutch

La región de Kutch es uno de los polos clave de industrialización de Gujarat y, con una superficie de 45.652 km², es el distrito más grande de la India. Con tres puertos importantes en Kandla, Mundra y Mandavi, es promocionado por el gobierno de Gujarat como la 'puerta de acceso al comercio internacional'. Además de estos tres puertos, el distrito cuenta con doce zonas económicas especiales (SEZ, por su sigla en inglés), trece polígonos industriales y tres parques industriales, y se erige ahora como polo de desarrollo de industrias químicas, de minerales, textiles, energía, turismo y puertos.⁷

La hiper industrialización de esta región es aún más impactante y paradójica debido a que el Golfo de Kutch, que delimita la masa terrestre de Saurashtra al sur de la masa terrestre de Kutch al norte, es además una región oficialmente declarada como sensible ecológicamente. El Parque Nacional y Santuario Marino del Golfo de Kutch (MNPS, por su sigla en inglés) que se extiende a lo largo de la costa sur de Saurashtra fue designado área protegida en 1980. Irónicamente, tan pronto como esto ocurrió la región se convirtió en un centro clave de crecimiento industrial en Gujarat, amenazando su ecología marina y economía tradicional. Las violaciones y debilitamiento de las reglamentaciones ambientales como la Zona de Regulación Costera (CRZ, por su sigla en inglés) han devenido en una superabundancia de industrias petroquímicas (la refinería más grande del mundo, propiedad de *Reliance Industries*, se encuentra en Jamnagar), de carbonato de sodio, cemento, fertilizantes, salineras, de energía térmica, desguace de barcos y puertos que saturan la región poniéndola al borde de un desastre ambiental.

La usina CGPL de Tata

Este ultra megaproyecto energético de Tata es una usina de energía supercrítica de 4.000 megavatios (5 unidades de 800 MW cada una) instalada por la *Coastal Gujarat Power Limited* (CGPL), una empresa subsidiaria del Grupo de compañías Tata. El sitio del proyecto se encuentra en

la aldea de Tundawand en Mundra. Aparte de la usina de Tata, hay otras dos usinas térmicas en construcción en las inmediaciones: la usina de 4620 MW que está construyendo la *Adani Power Private Limited*, y una usina de 300 MW de la *OPG Power Gujarat Private Limited*. Estas usinas térmicas se benefician además de infraestructuras que incluyen una vía férrea privada, el Puerto de Mundra y la Zona Económica Especial de Mundra—todo de propiedad del Grupo de compañías Adani que las administra.

La usina CGPL generó polémica desde un principio, y los desarrolladores del proyecto están lidiando hoy en día con retrasos (la primera de las cinco unidades iba a ponerse en funcionamiento en septiembre de 2011, pero en enero de 2012 las calderas todavía no se habían activado) e incrementos de los precios del carbón. La usina tenía pensado originalmente utilizar carbón importado de Indonesia, pero en vista de los impuestos a la exportación de carbón recientemente fijados en Indonesia, la CGPL está actualmente considerando la posibilidad de usar carbón de origen nacional para una parte de sus operaciones.

La usina CGPL está ubicada en una región ecológicamente sensible - en la llanura costera del Golfo de Kutch, en una zona de manglares, marismas intermareales, arroyos, dunas de arena y estuarios. La base de sustento de la población local incluye pesca, producción de sal, agricultura y cría de animales y está estrechamente ligada a la ecología.

En julio de 2010, el directorio del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) decidió rechazar en su 55ª reunión ejecutiva la solicitud de bonos de carbono presentada por CGPL. La razón citada para esa decisión fue que el proyecto no cumple el requisito de adicionalidad. Uno de los criterios establecidos para obtener bonos de carbono es la importancia que reviste el financiamiento del MDL para la viabilidad económica del proyecto, es decir, que sin el financiamiento adicional provisto por el MDL el proyecto no sería viable. Resultaba bastante evidente de la historia del proyecto que la CGPL no había previsto ingresos del MDL originalmente en sus cuentas. Además, dos de las entidades financiadoras clave del proyecto, la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Grupo del Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por su sigla en inglés) tampoco habían tenido en cuenta el posible registro del proyecto en el MDL cuando decidieron extenderle créditos. Evidentemente los desarrolladores del proyecto esperaban que el MDL fuera un ingreso extra para un proyecto que ya era viable y rentable y



La usina de energía térmica de Tata CGPL, de 4000 Megavatios, bajo construcción.

que ya tenía asegurado el financiamiento requerido a través de un sinnúmero de instituciones.⁸ Aparte de la CFI y el ADB, el proyecto contaba además con financiamiento en trámite de un consorcio de grandes bancos, tanto extranjeros —como el Banco de Importación y Exportación de Corea, la Corporación de Seguros de Exportación de Corea y el BNP Paribas— y de fuentes de origen nacional como el Banco del Estado de la India, la Compañía Financiera de Infraestructura India Ltda., la Corporación de Vivienda y Desarrollo Urbano Ltda., el Banco Oriental de Comercio, el Banco de Vijaya, el Banco Estatal de Bikaner & Jaipur, el Banco del Estado de Hyderabad, el Banco del Estado de Travancore y el Banco del Estado de Indore. El costo total del proyecto se estimó en más de USD 4 mil millones.

Sin haberse aparentemente inmutado por el rechazo inicial, la CGPL volvió a solicitar bonos del MDL en junio de 2011. Hasta enero de 2012, su caso todavía no se había resuelto.

La próxima sección del informe explora más allá de los criterios de adicionalidad y analiza los impactos sociales y ambientales

del proyecto que, a nuestro parecer, refuerzan aun más los argumentos para una nueva decisión negativa del MDL. La contribución de la actividad del proyecto al desarrollo sostenible es también un objetivo importante del régimen del MDL. Aunque sostiene lo contrario en su Documento de Diseño del Proyecto (PDD, por su sigla en inglés), la usina CGPL no cumple ni siquiera con los objetivos sociales y ambientales más básicos. El PDD menciona que la actividad del proyecto propuesta beneficiará a la comunidad local mediante la generación de empleo (tanto directo como indirecto) y el fortalecimiento de la infraestructura social de la región.⁹

Preocupaciones sociales y ambientales

La construcción de las usinas de energía (tanto la de Adani como la CGPL de Tata), pone en riesgo el sustento de aproximadamente diez mil pescadores tradicionales.

Dirigida por su Secretario General Bharat Patel y su Vice Presidenta Amina Behen, la Machimar Adhikar Sangharsh Samiti (MASS)¹⁰ ha puesto de relieve varias violaciones de los desarrolladores del proyecto a las políticas sociales y ambientales. Una de las preocupaciones centrales de la MASS son los graves impactos acumulativos adversos que implicarán para la ecología marina las numerosas unidades industriales al sur del Golfo de Kutch (en la zona de Jamnagar), y la Zona Económica Especial de Mundra, el Puerto de Mundra y cerca de diez usinas térmicas de gran porte (entre ellas CGPL) al norte y sur del Golfo. Las agencias gubernamentales competentes no han hecho hasta ahora ninguna evaluación del impacto acumulativo que mida la escala potencial y actual del daño ambiental. A falta de una evaluación de ese tipo a nivel local, la MASS se opone rotundamente a que la usina CGPL sea validada como un proyecto limpio elegible para bonos de carbono.

La MASS afirma además que la CGPL violó los términos de la autorización ambiental obtenida del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques (MoEF, por su sigla en inglés). El permiso/autorización del MoEF fue otorgado a condición de que la CGPL instalara una torre de refrigeración de circuito cerrado. Pero en lugar de esa torre, la CGPL construyó un canal abierto de refrigeración, que es una opción más económica pero más dañina desde el punto de vista ambiental. CGPL sostiene que el MoEF autorizó una enmienda del permiso anterior, pero la empresa aún no le ha entregado

una copia de ese documento a la MASS, a pesar de habérsela solicitado. La MASS citó diversos estudios de investigación que muestran el impacto negativo de la tecnología utilizada actualmente por la CGPL, que mata la vida marina de las inmediaciones a pesar de ser asequible económicamente. Bharat Patel de la MASS dice que las aguas vertidas del canal abierto de refrigeración serán significativamente más calientes que las aguas naturales y que eso matará a los peces del arroyo circundante que son el sustento de los pescadores. Patel menciona que la construcción del canal de desagüe implicó el vertido una inmensa cantidad de desechos a los tres caladeros (Tragadi, Modhva y Kotda) donde pescan los miembros de su sindicato. Los pescadores que fueron entrevistados durante la visita de campo reiteraron lo dicho por Patel respecto a que el canal de desagüe bloqueará el arroyo donde pescan, aumentará la temperatura cuando se liberen aguas residuales calientes de la usina CGPL y a la postre destruirá cerca de 250 hectáreas de manglares, una vez que la usina esté lista y funcionando a plena capacidad.

Las usinas de Adani y CGPL también comparten el mismo canal de ingreso de agua del cual no se ha hecho ninguna evaluación de impacto ambiental. La MASS menciona que si dichos estudios se llevaron efectivamente a cabo ya sea por encargo del Ministerio o de los promotores del proyecto, hasta el momento no hay ninguna información pública disponible al respecto.



Secando pescado en el pueblo de pescadores de Tragadi. La usina de CGPL es visible detrás.

La solicitud de CGPL al MDL deberá ser revisada necesariamente con una óptica más amplia desde el punto de vista del desarrollo. CGPL pretende transportar su carbón indonesio desde el puerto de Mundra que se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros de la usina. Con este fin se ha propuesto una vía férrea exclusiva. El puerto y la vía férrea han sido blancos de críticas del MoEF porque violan las disposiciones ambientales de la Zona de Regulación Costera (CRZ). El MoEF les ha pedido a los desarrolladores que demuestren la razón para usar material de dragado en la zona oeste y norte del puerto. Los promotores del proyecto también han colocado tuberías de desechos del dragado en un área intermareal (las disposiciones de la CRZ lo prohíben) que ha obstruido el flujo de las mareas, provocando daño a los manglares. La MASS sostiene que como el puerto de Mundra y la vía férrea exclusiva son parte integral del proyecto de la CGPL, la violación de la CRZ y la destrucción de los manglares deberían tomarse en cuenta en el proceso de aprobación del MDL.

Otra falla grave del proyecto de la CGPL es que a pesar de las diversas y obvias repercusiones adversas para la comunidad pesquera tradicional que vive (y deriva su sustento) al lado del sitio del proyecto, se ha hecho completo caso omiso de sus preocupaciones. La Evaluación del Impacto Social de la CGPL manifiesta que la zona del proyecto es inhabitada y no tiene asentamientos, y que no es por lo tanto necesario ningún reasentamiento o rehabilitación de los recursos marinos. En un documento preparado para el Banco Asiático de Desarrollo (uno de los financiadores principales del proyecto) sobre sus planes de reasentamiento de comunidades afectadas por el proyecto, la CGPL manifiesta que:

“Aunque el potencial pesquero del Golfo de Kutch es considerable, no hay ninguna actividad pesquera en las aguas costeras que están directamente en frente del área del proyecto que presenta vastas marismas intermareales. La pequeña comunidad pesquera más cercana se encuentra en los bancos del arroyo Kotdi ubicado fuera del área del proyecto a casi 2,8 km de distancia del arroyo Mudhwa. El vertido de agua de refrigeración consumida no afectará las actividades pesqueras en el Golfo, ya que tiene lugar varios kilómetros mar adentro. La colocación de una alcantarilla sobre el canal de ingreso de agua asegurará el acceso continuo de la comunidad pesquera a las áreas de secado de pescado en la franja costera.”¹¹

Esa es una clara tergiversación de los hechos que la MASS ha objetado sistemáticamente mediante pruebas históricas, informes de investigación y documentación fotográfica. La costa de Mundra ha sido durante siglos caladero de pesca de la comunidad pesquera de Wagher -- una comunidad migratoria que se asienta en la zona durante nueve o diez meses cada año. Únicamente regresan a sus aldeas durante la temporada baja de pesca. La MASS ha probado que hay diez poblados pesqueros en la costa de Mundra, y que el proyecto de la CGPL afecta directamente a dos de esos poblados, Tragadi y Kutadi. Al afirmar que la zona está inhabitada, CGPL elude su responsabilidad de establecer políticas de resguardo y subsanar el problema de la disminución a largo plazo de la captura de peces debido a los desechos industriales y la tala de manglares. Al adoptar esta cínica postura, CGPL también elude su responsabilidad de resolver cuestiones tales como la pérdida del derecho de paso desde el puerto pesquero hasta el mercado más cercano (la antigua distancia de siete kilómetros se duplicó ahora debido a la construcción del canal de desagüe) y la pérdida de fuentes de agua dulce para la comunidad pesquera debido al vertido de desechos.

Amina Behen, una de las líderes de la MASS afirma que ni la compañía ni el gobierno han fijado políticas que se ocupen de los impactos adversos para las mujeres. El secado del pescado lo hacen mayoritariamente las mujeres y requiere grandes extensiones al aire libre con luz solar adecuada. Ella expresa que la tierra ocupada por el proyecto las ha privado de espacios de secado y que las cenizas que vuelan desde la usina contaminan los peces tornándolos incomedibles.

A pesar que hace completo caso omiso de las preocupaciones de la comunidad local, el Documento de Diseño del Proyecto (PDD) de la CGPL sostiene que el proyecto los beneficiará mediante la generación de empleo directo e indirecto y el fortalecimiento de la infraestructura social. Las visitas a la zona del proyecto y las entrevistas con personas como Amina Behen demuestran la falsedad de dichas afirmaciones. La comunidad local, cuyas habilidades son la ganadería, la agricultura y la pesca, está perdiendo su sustento debido a la usina y lo más probable es que no consigan ningún empleo de significación en la usina de energía. Al afirmar que no hay comunidades locales afectadas, CGPL ha eludido hábilmente el tema de la indemnización.

Respecto a los bonos de carbono, hay interrogantes muy básicas que ponen en cuestión el hecho que se clasifique a las mega-usinas de energía supercrítica a carbón como un

Mecanismo de Desarrollo Limpio para mitigar emisiones. Una vez que esté sincronizada para funcionar a plena capacidad, la usina CGPL será una de las fuentes individuales de emisiones más grandes del mundo (las estimaciones según las cartillas de puntaje de CO₂ indican que emitirá la asombrosa cantidad de 26 millones de toneladas de CO₂ por año ¹²).

De otra parte, la frágil fundamentación de CGPL para solicitar bonos de carbono se basa en que está empleando tecnología supercrítica, una opción más costosa que la básica “sub-crítica”. Pero ésta es una afirmación falsa, ya que el Ministerio de Energía exige que *todas* las usinas térmicas de gran porte que funcionan a carbón en India utilicen tecnología supercrítica, motivo por el cual en las esferas de la política energética esa tecnología ya dejó de ser considerada como adicional.¹³

¿Y ahora qué?

CGPL se encuentra actualmente en el ojo de la tormenta de la crisis del carbón en la India. Los precios internacionales del carbón están en alza y la era del carbón barato subsidiado de la empresa estatal *Coal India Limited* (CIL) está siendo cuestionada por activistas e inversionistas por igual (pero por diferentes motivos). Mundra es de muchas maneras un microcosmos de la historia del desarrollo de la India, donde nefastos proyectos energéticos continúan siendo fomentados con poca consideración de los costos sociales y ambientales. Los miembros de la MASS reconocen que es poco probable que una segunda decisión negativa del directorio ejecutivo del MDL a la solicitud de CGPL consiga echar por tierra los planes de la usina cuya construcción está casi finalizada. Ya hay informes en los medios acerca de las tratativas de CGPL con sus posibles clientes compradores de energía en los estados vecinos de Maharashtra, Punjab y Haryana para renegociar su tarifa básica. Entretanto, la MASS continúa por su lado reclamando indemnización legal por la pérdida de medios de sustento y por los impactos adversos a la salud y el medioambiente. También reclaman acciones punitivas contra CGPL por la destrucción de recursos ambientales tales como arroyos, dunas de arena y manglares. Hasta que no se hayan aplicado las medidas que reclaman, su objetivo es paralizar el proyecto. Irónicamente, el proyecto se encuentra actualmente paralizado debido al impasse de los precios del carbón.



(Encima) En el frente es el canal de desagüe que corta al medio la ruta que us an los pescadores para llegar al mercado cercano. (Abajo) Residuos de la construcción han afectado el agua dulce de la comunidad pesquera.

- 1 El estudio de caso fue llevado a cabo por Benny Kuruville mediante diversas entrevistas con miembros de la Machimar Adhikar Sangharsh Samiti (Asociación para la Protección de los Derechos de los Pueblos Pescadores) y una visita de campo a la zona del proyecto en diciembre de 2011. El autor agradece asimismo los aportes de Athialy y Anuradha Munshi de la oficina del *Bank Information Center* (BIC) en Asia del Sur.
- 2 http://www.cea.nic.in/reports/monthly/executive_rep/sep11/8.pdf (visitado el 20 de septiembre de 2011).
- 3 Gobierno de la India (2006). 'Integrated Energy Policy'. Comisión de Planificación, agosto.
- 4 Prayas Energy Group (2011). 'Thermal plants on the anvil – Implications and need for rationalisation'. Septiembre.
- 5 <http://www.vibrantgujarat.com/why-gujarat/strong-economic-credentials.aspx> (accedido el 20 de setiembre de 2011)
- 6 Ibid
- 7 Gobierno de Gujarat (2007). Comisariado de Industrias.
- 8 <http://www.businessstandard.com/india/news/tata-wrapsfinance-pacts-for-mundra-umpp/321166/>
- 9 PDD disponible en: <http://cdm.unfccc.int/filestorage/L/Q/H/LQHW6OR1VE0UBSYC4N8FDMPZ3I2X95/GHG%20Emission%20Reductions%20through%20grid%20connected%20high%20efficiency%20power%20generation%20-%20PDD.pdf?t=M2Z8bTI3OHho fDDlsptWFj9hc5yq9iRUvOS4>
- 10 En castellano se traduce como Asociación para la Protección de los Derechos de los Pueblos Pescadores.
- 11 Documento de Planificación de Reasentamiento, Plan de Reasentamiento Resumido, preparado por la *Coastal Gujarat Power Limited*, septiembre de 2008; http://www.adb.org/Documents/Resettlement_Plans/IND/41946/41946INDRP.pdf
- 12 <http://www.co2scorecard.org/home/researchitem/20>
- 13 http://www.powermin.nic.in/whats_new/pdf/ultra%20mega%20project.pdf



ISBN 978-616-551-497-2



9 786165 514972 >

Special thanks to:



For more information, including videos which accompany this study, go to www.focusweb.org